

CAPITULO 9. EL SOCIALISMO EN LOS GOBIERNOS DE CONCERTACIÓN (1990 – 2000).

LAS IZQUIERDAS: GOBIERNO Y OPOSICIÓN (483); LAS DISCREPANCIAS FRENTE A LA POLÍTICA DE CONSENSOS, LOS DERECHOS HUMANOS Y EL MODELO ECONÓMICO (492); LAS IZQUIERDAS ANTE LA INALCANZABLE RECONCILIACIÓN Y LA ACCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES (501); LA DISCUSIÓN SOBRE EL DESENCANTO Y LA LUCHA POR LOS DDHH (511); LA CANDIDATURA Y EL TRIUNFO DE RICARDO LAGOS (522).

LAS IZQUIERDAS: GOBIERNO Y OPOSICIÓN.

Luego del plebiscito y del triunfo de Aylwin, las izquierdas entran en una fase particularmente compleja para su relación con la base de la sociedad y el movimiento popular. Ha quedado atrás la euforia movilizadora y unificadora del fin de la dictadura. El tiempo que viene requiere hacer cuentas con una realidad que, muchas veces, parece más resistente a los cambios que lo esperado. La visión del historiador Luis Corvalán Márquez es que los pactos de la transición sitúan a los gobiernos de centroizquierda en los marcos del modelo económico neoliberal y que la sustitución del modelo político dictatorial deja progresivamente de ser una prioridad para la Concertación. Para Eugenio Tironi se trata, en cambio, de enfrentar, superando las disidencias de izquierda al interior de los gobiernos concertacionistas, una “contradicción vital” que desgarrará a la Concertación y la conducirá a una inevitable disyuntiva:

“o ésta admite sin ambages el sistema político y económico que le cabe administrar , o se reencuentra nuevamente con su pasado utópico y revolucionario”

El fantasma del retorno utópico de la revolución incitará a más de un izquierdista a la moderación de los objetivos de cambio social clásicos y a una deriva hacia el centro político cuyo objetivo declarado es la gobernabilidad del sistema. Una testigo atenta, Carolina Tohá, dirigente socialista de la FECH que ha participado en primera línea en las luchas de fines de los ochenta, años más tarde funcionaria de gobierno y diputada del PPD, ve en ese giro de la izquierda hacia el orden del sistema la causa que impide hacerse cargo del país a la generación política surgida de la lucha social democrática. Es el momento de los antiguos políticos “expertos”, dice, la juventud estudiantil que luchó contra la dictadura se retira del espacio público, “una generación de líderes sociales pasa a ser una generación de técnicos”:

“comenzó todo el proceso de asumir que la Concertación iba a dirigir este país. Esto implicaba que iba a gobernar con esta institucionalidad, con esta Constitución, con este orden económico y de alguna manera la radicalidad del discurso cambió profundamente en ese tiempo. Este fue un proceso donde socialmente la gente participó muy poco y hubo, además, muy poca información. Quizás no había otra posibilidad, pero el costo de que fuera así fue muy grande, porque al final de esa vuelta muchos actores que habían sido claves hasta el 88, cuando llegamos al 89 ya no eran protagonistas [...] Primero, porque la política dejó de ser esta gran movilización social y volvió a ser una política de entendimientos y de acuerdos, en que los protagonistas y los expertos eran otros. En segundo lugar, porque fue una política orientada mucho más a hacer factible la conducción del país y menos orientada a cambiar las cosas, y para esto había gente mucho más adiestrada y dispuesta que los dirigentes más jóvenes. Y tercero, porque volvió a ser una política de disputa por el poder, cosa en la cual la generación nuestra era totalmente inepta [...] Toda la gente de nuestra generación no sabía hacer estas

cosas, no le gustaba hacer estas cosas, les daba vergüenza y todos fueron de alguna manera expulsados o bien se sintieron más cómodos asumiendo roles en el ámbito profesional privado. De ser una generación de líderes sociales, pasó a ser una generación de técnicos”

Una similar explicación del cambio de espíritu y contenido de la política democrática, que ocurre al asumir la Concertación el gobierno, entregan los nuevos representantes de “la izquierda” DC. Sergio Micco, años más tarde, reivindicará el componente de “*crítica al capitalismo*” que hizo parte históricamente de la línea de la DC. En cambio hoy, dice,

“si te atreves a cuestionar el modelo neoliberal, tus ideas, por más razonadas y documentadas que estén, son estigmatizadas como cavernarias, estatistas, populistas, románticas, nostálgicas, todo un amable silabario que nos dedica gente incluso de la Concertación”.

Y en referencia al desengaño frente a la política realista de los primeros años 90, su explicación, como la de C. Tohá, es generacional aunque, en su caso, la frustración de las expectativas generadas por la experiencia de la lucha antidictatorial explica sólo una parte. También influye, parece decir, el peso de una cultura e ideología conformista, individualista, carente del “comunitarismo” que había distinguido en el pasado al progresismo en su versión DC:

“Nosotros éramos expertos en tomas de locales estudiantiles, en paros, en protestas. Pero eso no sirve de nada cuando hay que designar un Seremi, un intendente, un gobernador, o elegir bien un distrito o hacer caja para ganar la elección de diputado o senador. Además yo te diría como autocrítica que la ansiedad por el poder nos jugó también una mala pasada. Algunos de mi generación entraron a participar como ministros, diputados. En general, la evaluación hasta el día de hoy no es buena, porque se obró en forma individualista y muy solitaria. Se asumió que hay formas establecidas de hacer carrera política: o las aceptas o quedas fuera del cuadro. Creo que esta aceptación nos jugó una mala pasada: Nos faltaron fuerzas, nos faltó convicción, nos faltó comunitarismo”

Y para Arturo Martínez, socialista, dirigente nacional de la CUT, el desengaño tiene también el signo de un abandono del movimiento social, que había sido clave en la lucha contra la dictadura. Los partidos políticos, recuerda diez años después con acentos que evocan a los “rebeldes” de otras épocas, le “*vuelven la espalda*” al movimiento social, “*pero lo más terrible es que mucha veces, en vez de ayudar a construir la unidad para acá, nos trataron de desunir*”. Hubo, agrega, una “traición” de los partidos y los políticos al movimiento social. Incluso después del plebiscito, los dirigentes concertacionistas dejaron pasar, sin reaccionar, catorce meses más de relegación para M. Bustos y él. La alegría prometida en la campaña electoral no llegó nunca:

“Recuerdo que a nosotros nos dijeron que íbamos a tener un nuevo código del trabajo, que reformaríamos la seguridad social, que se revisaría todo el sistema de privatizaciones que había ocurrido en la dictadura, que íbamos a buscar mecanismos de participación ciudadana en el nuevo gobierno, que tendríamos un desarrollo social. Pero a la gente le prometieron, en los discursos, para poder ganar, resolver problemas de pobreza, de educación, de salud. ¡Problemas que todavía no se resuelven! [...] Entonces, con el movimiento social la Concertación tiene mucha deuda, y lo más triste es que hoy día todo lo que fue la lucha contra la dictadura se analiza desde el punto de vista de lo que hicieron los partidos. Pero estos en Chile se vinieron a meter cuando aquí estaba el movimiento de protesta instalado, antes no [...] Al igual que el apoyo que entregaron las mujeres, yo tengo una cantidad de imágenes con todas las movilizaciones de las mujeres por la vida, y hoy día nadie se acuerda de ellas. También los profesionales, con la asamblea de la civilidad; ¿quién se acuerda de eso?”

El PC, por su parte, no escapa a las dificultades y complejidades de la nueva etapa. El sector socialista encabezado por Clodomiro Almeyda ha resuelto reunificarse con el que dirige Jorge

Arrate, terminar el partido PAIS y participar plenamente en el gobierno de Concertación que preside un demócrata cristiano y al que el PC no ha sido invitado. Corvalán en sus memorias transcribe sus notas de una conversación con una delegación del recién reunificado PS, pocos días después del triunfo de Aylwin y señala que entonces ya es evidente la nueva política del PS, que no es de unidad de la izquierda sino de alianza con el centro político:

“La componían Jorge Arrate, Clodomiro Almeyda y Luis Alvarado. Su Secretario General Arrate nos expresó en esa ocasión que “siempre el Partido Socialista estará con una disposición especial para con el PC. Todos los dirigentes más jóvenes del PS crecimos con la unidad PC-PS; siempre le reconoceremos al PC su lealtad con Allende hasta el último minuto y el hecho de que ha sido una de las fuerzas más perseguidas por la dictadura.[...] La única opción que tenemos es por el éxito de la democracia y en este camino hay distintas pistas. Viviremos todos bajo una amenaza militar que puede ser real o artificial, pero que existirá igualmente” [...] Almeyda dijo: “La izquierda chilena pasa por un período de reflexión. [...] Como izquierda tenemos la obligación de entendernos y coincidir en lo posible. Pero no somos partidarios de una nueva alianza de izquierda por el momento. Nos parece que sería abortiva en este instante de discusión y análisis. Tenemos como norte de nuestra política de alianzas la alianza que incluye al centro”.

Años más tarde Corvalán señalará que la política del PS es una involución que lo separa de las definiciones ideológicas y políticas clásicas de la izquierda:

“Es un hecho que el PS ha sufrido una involución. Hoy acepta, al lado del marxismo, el liberalismo político, ya no se declara leninista y es miembro de la Internacional Socialista, privilegia su entendimiento con la Democracia Cristiana en vez de su unidad con el PC, abandona la política de unidad de la izquierda y, aunque no comparte toda la actuación del Gobierno, de hecho respalda su orientación neoliberal y carece de una propuesta distinta.”

Pero al PC no sólo le afecta el cambio de aliados del PS, sino que en la primera parte de la década de los noventa el PC es cruzado internamente por el debate sobre la política de sublevación popular armada, que ha significado ya en 1987 la ruptura del FPMR, y la definición de una forma de inserción en la democracia que, aún limitada, está reabriendo sus espacios. Los años siguientes serán tiempo de duros debates, de renunciadas y escisiones, en que se alejan del PC militantes de base y cuadros sindicales, intelectuales y ex parlamentarios. Uno de ellos es Fanny Pollarolo, que ha representado al partido en los movimientos de derechos humanos y de mujeres en las fases decisivas de la lucha contra la dictadura. Pollarolo se integrará al Partido Democrático de Izquierda, de existencia efímera, y más tarde al PS, del que será diputada. Para ella, la ruptura con el PC se debe a la incapacidad para ir a fondo en la autocrítica, particularmente en relación a lo que fue la actitud histórica frente al “socialismo real”:

“Al año siguiente del triunfo del No, cuando comienza vivirse una vida más normal, en el Partido Comunista se empiezan a tener discusiones en los plenos, y mi ruptura se da con mucha rapidez, porque me di cuenta de que el gran debate ideológico en torno a la caída del muro, de las crisis de los socialismos reales, nunca se realizó. Sentía que había que profundizar en lo que había pasado: ¿por qué?, ¿qué había sido lo valioso?, ¿lo equivocado?, ¿dónde habíamos estado ciegos?, ¿cuáles habían sido los errores? Pero no había ninguna posibilidad de discutir y eso para mí fue un shock muy grande. Porque habíamos luchado tanto por la libertad y ésta también se debe dar en el plano intelectual. Mi crisis se da cuando en la vida partidaria en el Partido Comunista se cierra la posibilidad de una discusión a fondo de lo que había pasado en el mundo en el campo comunista.”

Volodia Teitelboim, secundado entre otros por Gladys Marín y Jorge Insunza, dirige el PC durante este turbulento período. Al promediar la década el PC consolida una fuerza estable y organizada con presencia sindical y estudiantil y una votación nacional en elecciones parlamentarias y municipales que supera el 6%. Una vez disuelto el PAIS el PC genera el

MIDA (Movimiento de Izquierda Democrático Allendista), en conjunto con grupos menores de izquierda y participa bajo esa divisa en las elecciones parlamentarias de 1993.

VOLODIA VALENTÍN TEITELBOIM VOLOSKY
dirigente comunista y escritor destacado

Teitelboim nace en Chillán en 1916, hijo de padre ucraniano y madre moldava, ambos inmigrantes judíos. Su padre es dueño de un comercio de telas en Curicó, en cuyo liceo Volodia cursa la educación secundaria. Su madre se dedica al cuidado de sus cuatro hijos. Ingres a la Universidad de Chile y a los dieciocho años es electo presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho. Se recibe de abogado en 1945 y ese mismo año pasa a integrar la comisión política del PC. La política, junto al periodismo y la literatura, serán las pasiones de su vida.

Como periodista se desempeña como redactor deportivo, reportero, crítico literario y columnista en varios medios escritos. En particular destaca su actividad en los periódicos *Frente Popular* y *El Siglo*. En los años cincuenta funda y dirige, en Santiago, la revista cultural *Aurora*. Luego del golpe de 1973, ya exiliado, colabora en la prensa europea y latinoamericana y mantiene durante 15 años un espacio bisemanal por Radio Moscú en el programa *Escucha Chile*. Volodia intenta así, persistentemente, romper el cerco informativo y cultural que la dictadura ha tendido en Chile. Dirige también otra revista cultural, *Araucaria de Chile*, publicada trimestralmente en Madrid durante doce años, que busca ser un nexo de unión para la diáspora intelectual chilena.

En la década de los cuarenta vive durante un período en la clandestinidad. Es detenido y encarcelado brevemente en varias oportunidades y es recluso, bajo el gobierno de González Videla, en el campo de prisioneros de Pisagua. Participa activamente en las campañas presidenciales de Salvador Allende, desde 1952 hasta 1970. Es diputado por Valparaíso desde 1961 a 1965 y, luego, senador por Santiago por dos períodos consecutivos, la última vez, en marzo de 1973, obteniendo la segunda mayoría nacional.

El golpe militar lo sorprende fuera de Chile. Desde entonces vive desplazándose por diversas naciones y continentes y durante década y media reside en Europa, especialmente en Moscú, sin nacionalidad, ya que la Junta Militar le despoja de su condición de chileno, hasta su retorno legal al país en 1988. Se convierte en esos años en una de las figuras que animan el movimiento de solidaridad internacional con Chile. En 1989 es elegido secretario general del PC en reemplazo de Luis Corvalán, cargo que desempeña hasta 1994.

Su obra literaria se remonta a 1935. A los 19 años publica, en colaboración con el poeta Eduardo Anguita, la *Antología de poesía chilena nueva*. En su época el libro señala un punto de ruptura y suscita una célebre polémica literaria. En ella intervienen con ardor Vicente Huidobro y Pablo de Rokha y participa también, *in absentia*, Pablo Neruda, que llegaría a tener una estrecha amistad con Volodia. Considerado miembro de la llamada "*Generación del 38*", sobre la cual escribió varios ensayos, ha ejercido la crítica literaria en diversas publicaciones. Durante medio siglo, incluyendo los 15 años de su exilio europeo, Teitelboim no sólo trabaja como analista del quehacer literario de los demás, sino también como autor y creador por cuenta propia en diversos géneros. Entre sus obras más afamadas se cuenta la novela *Hijo del Salitre*, publicada en 1952. Cinco años más tarde publica *La Semilla en la Arena*, que Neruda calificó de "*libro emocionante (...) sobre todo inicial y augural de lo que pedimos al novelista y al poeta, que no sólo sea hombre de nuestro tiempo, sino hombre para todos los tiempos*". Teitelboim continúa publicando novelas y ensayos hasta que en 1984 da inicio a una serie de biografías de impacto editorial con su obra *Neruda*, hoy traducida a múltiples lenguas. Agrega a ella en los años siguientes biografías de Gabriela Mistral y Vicente Huidobro y una penetrante mirada a la obra y personalidad de Jorge Luis Borges. En los últimos cinco años Teitelboim produce dos libros constitutivos de una saga autobiográfica que se completará con un tercero y textos con recuerdos, testimonios y reflexiones literarias y políticas.

Teitelboim ha recibido numerosos premios literarios, el último el Premio Nacional de Literatura en el año 2002. Figura cultural y política única en la historia de la izquierda, Teitelboim ha logrado unificar el compromiso político con una pasión literaria de amplia gama. Cuando cumplió 80 años la periodista Faride Zerán se preguntó:

"¿Cómo se cumplen 80 años? En el caso de Volodia, abogado, periodista, ex senador, ex secretario general del PC, se cumplen con serenidad, trabajo y sobre todo con pasión. La pasión de un testigo de su época, de cargo y de descargo, que mira el presente y señala con optimismo que más allá del marketing el hombre no ha sido aniquilado por el conformismo y el reino del dinero".

La crisis del PC, como la denominarán incluso dirigentes y militantes insospechables de "tremendismo", como Luis Corvalán, es producto de diversos factores. La línea radicalizada puesta en práctica en los ochenta no tuvo éxito y se impuso, en cambio, la política de la negociación de la transición. El derrumbe del comunismo del este europeo constituyó un fuerte golpe a la interpretación ideológica sustentada por el PC. La política de rebelión popular se vio deformada por las tendencias más militaristas. Agrega Corvalán que el PC se vio afectado por una especie de "incoherencia" entre discurso y práctica. Al fin de la dictadura, dice, el partido siguió una línea que "*había cuestionado abiertamente*":

"Nos afectó también el retraso con que resolvimos promover la inscripción electoral y participar en el plebiscito y en la consiguiente contienda electoral. (...) Y aunque nuestra votación terminó resultando decisiva tanto para el triunfo del NO en el plebiscito como para la elección de Patricio Aylwin como Presidente de la República, ni una ni otra victoria acrecentó el prestigio de nuestro Partido dado el hecho de que en ambos casos terminamos por sumarnos a un camino que no era el que habíamos buscado y que habíamos cuestionado abiertamente".

En relación al gobierno de Aylwin el PC se plantea en una posición de “independencia constructiva” de apoyo a todo aquello que, a su juicio, contribuya a democratizar el país. En el transcurso del decenio esta posición derivará a planteamientos opositores radicales, por estimar que las políticas concertacionistas son de continuidad con los contenidos económicos del régimen militar y de debilidad en sus aspectos políticos y sociales, como señala Oscar Azócar:

“Yo creo que esta salida pactada es la que marca el desarrollo posterior de los acontecimientos políticos de Chile y es lo que marca también, en lo esencial, el acierto de la línea del Partido Comunista. Quisiera que me entendieran que no quiero decir que el Partido Comunista no haya tenido insuficiencias, sino que en lo esencial el Partido Comunista acierta en esta línea que al principio se denomina independencia constructiva, pero que muy rápidamente queda muy claro ---ante la evidencia de la salida pactada--- será de oposición a la Concertación y al sistema.”

Los socialistas vivirán, a su vez, en los primeros años noventa, un tiempo complejo de reconstrucción organizativa y política, reunificación y recuperación de su status legal. La alianza estable con el centro político, que antes de la dictadura había sido un duro adversario, y la permanente discrepancia con el PC, del que había sido aliado desde 1956, constituye un desafío ideológico y político de magnitud inédita para sus militantes y su dirección. Supone un aprendizaje prolongado en el tiempo y, muchas veces, dificultoso y contradictorio tanto en las ideas como en la acción. Abordarlo significa para el socialismo, según expresa Clodomiro Almeyda en los debates para la elaboración de un nuevo programa en 1992, enfrentar en las nuevas condiciones mundiales al neoliberalismo, al populismo y a “*las diversas expresiones de la inmadurez política de las fuerzas populares y de izquierda*”. Continúa Almeyda:

“En esta inmadurez halla su origen el sectarismo y el dogmatismo, el voluntarismo y el ideologismo, tendencias todas que representan otras tantas vallas que superar para poder levantar una alternativa democrática de izquierda, que aspire a ser hegemónica en la sociedad, ampliamente respaldada por ella. La rebeldía, la denuncia y el testimonio son elementos necesarios de una postura revolucionaria transformadora de la sociedad. Pero los movimientos populares no pueden agotarse en esa etapa primitiva, y en la medida que maduran y se desarrollan deben asumir una dimensión constructiva, que junto con retener lo valioso y permanente del pasado, niegue sus limitaciones e injusticias y se proyecte en la creación de nuevas situaciones, que superen las insuficiencias de las anteriores”.

La principal cuestión política para el PS, al comienzo de los años noventa, es cómo resolver la cuestión del PPD. Uno de los puntos de vista internos es terminar el “partido instrumental” que el sector dirigido por Núñez y Arrate había creado y fortalecer un PS como referente principal de una izquierda capaz de renovarse en todos sus niveles. En esta línea, Almeyda y Arrate propician una fórmula que coloque al PS y al PPD en la condición de partido y de movimiento, respectivamente, pero la propuesta no satisface a los dirigentes no socialistas del PPD ni a su presidente Ricardo Lagos, quienes consideran poco realista el planteamiento. Otra opción para el PS es subsumirse en el PPD y enfrentar el futuro con una identidad radicalmente modificada que permita desplegarse de manera más amplia en la sociedad chilena, social y culturalmente más “moderada” luego de los años de dictadura y las tendencias mundiales. Si bien ningún socialista levanta abiertamente esta postura algunos no socialistas del PPD, que habían estimado inoportuna la unificación socialista de 1989, la consideran el camino adecuado.

La opción elegida es una tercera, resultado de fatigosas pugnas internas. En virtud de ella, un grupo importante de socialistas permanecen por varios años en el PPD con una “doble militancia” que les permite participar y sufragar en ambas organizaciones. Otros, Arrate entre ellos, abandonan su pertenencia a ese partido y se vuelcan a la reconstrucción del PS.

A fines de 1991, según lo acordado en el Congreso de Unidad, Arrate deja la presidencia, y la asume Ricardo Núñez. Un año después, en 1992, es electo presidente Germán Correa, con el apoyo de sectores “nuñistas” y el segmento “almeydista” encabezado por el propio Correa que había tenido un rol protagónico en la proclamación de Aylwin como candidato presidencial de la Concertación. Derrota a Camilo Escalona, Clodomiro Almeyda y Jaime Estévez, representativos de sectores del viejo “almeydismo”, los dos primeros, y del “arratismo”, el tercero. Bajo la dirección de Almeyda y Arrate se había inscrito legalmente el PS y bajo la de Núñez continúa el gradual proceso de separación con el PPD, acordado ya a esas alturas por las dos organizaciones.

Las elecciones parlamentarias de 1993 serán un momento decisivo. En la confección de las listas de candidatos a parlamentarios PS y PPD comparten una misma plantilla dentro de la Concertación y se reconocen recíprocamente posibilidades equivalentes de representación parlamentaria. Dadas las características del sistema electoral, el acuerdo garantiza una práctica equiparidad electoral y parlamentaria entre ambos partidos. El cientista político Enrique Cañas ha descrito el momento como bicefalia política de una base social que ambos partidos comparten:

“el reposicionamiento del PS como partido “distinto” del PPD y la autodefinición de este último como “independiente” de aquel, tuvo como consecuencia la configuración de un fenómeno de bicefalia política que se fue expresando en una confusa competencia de identidades y de cooptaciones electorales sobre una clientela electoral más o menos similar. Durante el gobierno de Aylwin, las relaciones entre el PS y el PPD no estuvieron exentas de tensiones, a pesar de haber formado una rancada común y de haber establecido mecanismos bastante efectivos de coordinación. Los problemas surgieron cuando el PS exigió el término de la doble militancia en ambos partidos, y cuando desde uno y otro se intentó llevar a cabo una operación política destinada a producir la disolución del PPD. Esta iniciativa no tuvo éxito, lo que obligó al bloque PS-PPD a diseñar nuevos mecanismos de interacción que permitieran mitigar las situaciones de conflicto entre ellos”.

El PPD, que para el plebiscito no integra la Concertación por ser un partido “instrumental” y de existencia transitoria, pasa a formar parte de la alianza cuando madura en la mayoría de sus dirigentes la decisión de hacer de él un partido semejante a los existentes, con igualdad de derechos, obligaciones y características de funcionamiento. Su convivencia con el PS es, al comienzo de los noventa, conflictiva, en la medida en que las máximas autoridades de éste propician su terminación o su permanencia como un movimiento. El PPD atraviesa, pues, un período de afirmación de identidad y lo hace contraponiendo sus rasgos a los del PS. Sus principales dirigentes no socialistas, como Jorge Schaulsohn y Víctor Manuel Rebolledo, de origen radical, Vicente Sota, de origen Mapu, María María Maluenda, ex comunista, y Armando Jaramillo y Julio Subercaseaux, ex parlamentarios de derecha, buscan la constitución de una identidad PPD específica. Básicamente, se trata de establecer un partido con un nuevo estilo, menos sectario y formal que los partidos tradicionales de izquierda, impulsor de objetivos democráticos concretos, abierto a nuevos contingentes, no ideológico, sin historia previa y con un líder nacional: Ricardo Lagos. Quienes militan también en el PS deben, cumplido el plazo de dos años para terminar con esta “doble militancia”, optar por una de las dos organizaciones. Ricardo Núñez, Marcelo Schilling, Jaime Estévez, Jaime Gazmuri, Carlos Ominami, José Antonio Viera Gallo, Enrique Correa, Hernán Vodanovic e Isabel Allende, entre otros, optan por el PS. Sergio Bitar, Guillermo del Valle, Adriana Muñoz, Erich Schnake, Guido Girardi, entre otros, lo hacen por el PPD. Schnake, Schaulsohn, Bitar y Girardi presiden la organización durante el decenio.

La declaración de principios del PPD aprobada en enero de 1993 afirma categóricamente su especificidad. Es la experiencia de la lucha democrática y no las buenas intenciones, sostiene,

la que lo ha constituido “*como un actor político diferenciado*”, consolidado “*y proyectado hacia el futuro*”. Su presidente, Sergio Bitar, a su vez, sale al encuentro de quienes critican ya al PPD por su “*carencia de ideología*” o su “*excesivo pragmatismo*”:

“Somos un partido joven, donde convergen diversas tradiciones políticas: del socialismo democrático, el liberalismo progresista, el cristianismo popular y del humanismo laico [...] El PPD ha buscado abrir un nuevo espacio en el modo de realizar la política en el país. Nos hemos atrevido a buscar respuestas novedosas a la urgente necesidad de renovación política que se expresa con fuerza entre los jóvenes de Chile [...] Algunos nos objetan que somos un partido sin ideología. Es cierto, nuestra opción es ser un partido de ideas y no de ideologías. Rechazamos las visiones totalizantes e integristas de la vida y la sociedad [...] También se ha planteado que somos un partido excesivamente pragmático. Quienes así piensan no nos conocen. La defensa de la vida y de los derechos humanos nos guió en la recuperación de la democracia. De igual modo, nuestra activa participación política se ha orientado por los valores de la dignidad de los trabajadores y por la justicia social. El PPD desarrolla su acción política desde un sólido horizonte de valores”

El PR, por su parte, se ha reconstituido y logrado su inscripción en el registro de partidos políticos. Básicamente por razones electorales, su línea será, durante casi todo el decenio, más próxima a la DC que al PS o al PPD. Presidido por Anselmo Sule, secundado por antiguos dirigentes como Carlos González Márquez, Mario Astorga, Benjamín Teplizky y Enrique Silva Cimma, estos dos últimos ministros en el gobierno de Aylwin, irá aproximándose a un entendimiento con la izquierda de la Concertación que se concretará cuando a fines de los noventa se levante nuevamente la candidatura presidencial de Ricardo Lagos.

La Concertación entonces, coordinada por su Secretario Ejecutivo Juan Gutiérrez, está integrada por tres organizaciones políticas con matriz en la izquierda: el PS, el PPD y el Partido Radical Socialista Democrático (PRSD). Este último es el resultado de la fusión entre el PR y el grupo que constituía el Partido Social Demócrata, proveniente del PIR de 1972. Lo preside el senador Anselmo Sule (nota biográfica en pág.....).

ANSEMO SULE CANDIA:

chileno corriente y universal, radical de izquierda.

Hijo de Anselmo Sule Redovnicovic, comerciante oriundo de Croacia, y de Rosa Candia Gamonal, chilena, Anselmo Sule Candia nace el 27 de enero de 1934 en Santiago. Ingresa al PR a los 14 años, cursa la secundaria en el Liceo de Hombres de Los Andes, ciudad en la que vive con una hermana, ausente su padre por sus actividades y fallecida su madre cuando él tiene tres años. Es presidente del centro de alumnos del liceo y de su academia literaria. Para ayudarse económicamente se desempeña como auxiliar de una farmacia y del Seguro Social, obrero de la construcción y locutor de radio.

En 1951 ingresa a la Escuela de Leyes de la Universidad de Chile. Es dirigente del Grupo Universitario Radical y representa a su escuela en la FECH. Se desempeña como ayudante en diversas cátedras, trabaja como inspector del Internado Nacional Barros Arana y vende entradas en cines. A los 22 años de edad, se titula de abogado. En 1958 contrae matrimonio con Fresia Fernández, abogada y periodista, con quien tiene tres hijos. En 1961 es elegido presidente de la Juventud Radical y, al año siguiente, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del PR y consejero del Colegio de Abogados. En 1967 es vicepresidente de esa colectividad. La Convención Radical de este año adopta un pronunciamiento “progresista”, luego de años de alianzas de “derecha”: “*un régimen democrático no es posible si no está basado en el socialismo*”. Bajo la conducción de Hugo Miranda y A. Sule el radicalismo se incorpora a la UP y respalda la candidatura presidencial de Salvador Allende.

En 1969, a los 35 años, la edad mínima exigida por la ley, Anselmo Sule se convierte en el senador más joven de la historia parlamentaria chilena, representando a las provincias de O’Higgins y Colchagua. En 1970 es miembro de la comisión que redacta el “estatuto de garantías democráticas” exigido por la DC para votar por Allende en el Congreso Pleno. Entre 1971 y 1972 la UP. En 1972 es elegido presidente del PR y como tal es anfitrión de la primera reunión del Buró que la Internacional Socialista (IS) que se realiza fuera de Europa. Luego del golpe de 1973 es detenido y llevado a la Escuela Militar, incomunicado durante 70 días y enviado después a la isla Dawson. En julio de 1974 es puesto en libertad. Reinicia la actividad política y lo vuelven a detener e incomunicar, pasa por los campos de concentración de Cuatro Álamos, Tres Álamos, Ritoque, Puchuncaví y por la cárcel de Santiago. Es expulsado del país el 13 de febrero de 1975 con destino a Venezuela.

En su exilio participa de la campaña de solidaridad con Chile y la dictadura lo priva de su nacionalidad chilena. El declara que se siente más chileno que nunca y continúa su actividad. En 1976 es el primer latinoamericano elegido en una vicepresidencia en la IS a la que da un sello latinoamericanista y tercermundista. Es también vicepresidente del comité de la IS para América Latina y el Caribe, de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPPAL, y de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, ALDHU. En 1983, encabezados por Willy Brandt ex-canciller de Alemania y presidente de la IS nueve líderes mundiales envían el siguiente telegrama a Pinochet “*Pedimos dejar sin efecto medidas que impiden regreso a Chile de nuestro*

compañero Vice-Presidente de la Internacional Socialista Anselmo Sule". En 1984, seis presidentes latinoamericanos envían una carta con una demanda similar. En octubre de 1985 la Asamblea General de Uruguay, equivalente al Congreso Pleno, le concede la ciudadanía uruguaya por unanimidad. Con motivo de otra designación honorífica en Lima, el entonces presidente Alan García declara: "Sule es un ciudadano del mundo." En 1987 se presenta en México el libro "Testimonios de Lucha por la Democracia". Entre otros asiste Gabriel García Márquez quien subraya: "la consecuencia del autor, hay una coherencia política e intelectual desde las primeras páginas".

Cuando la dictadura levanta el exilio, Anselmo Sule regresa y se incorpora al PR en el país. Recupera la nacionalidad chilena y es elegido en 1989 senador por la VI Región, apoyado por el PR, PS, PPD y PAIS, con una de las primeras mayorías nacionales. Busca la reunificación del radicalismo, la que se logra en febrero de 1992, dando origen al Partido Radical Social Demócrata. En 1993, el PR lo nombra candidato presidencial y declina esa candidatura en favor de Eduardo Frei. En 1994 es nuevamente presidente de su partido, cargo que desempeña hasta poco antes de su muerte. Retorna a la vicepresidencia de la IS y ejerce como catedrático en la Universidad Tecnológica Metropolitana. En 1999 es el primero de los presidentes de partidos de la Concertación en proclamar la candidatura presidencial de Ricardo Lagos. El año 2001 es candidato a senador del PR, PS y PPD por la XI Región, logra el 25.4% sin ser elegido.

Sule es un chileno universal, que recibió distinciones y reconocimientos pero siguió siendo un hombre sencillo, acogedor, a cuya puerta nunca alguien tocó sin encontrar respuesta. Su norma de vida fueron estas palabras suyas:

"Todo nuestro quehacer político tiene como finalidad única al hombre y su desarrollo como tal. El ser humano no es para nosotros un medio o un instrumento; es un fin en sí mismo. Nuestra tarea es realizar ese fin."

Otro chileno que fue su amigo, Ismael Llona lo recordó del siguiente modo:

"Sentía empatía con Sule. Me interpretaba su abierto aire mesocrático, de la Universidad de Chile de los cincuenta y sesenta, su progresismo siempre autocrítico, su cuestionamiento a todo tipo de dogmas, el apoyo a la UP y a la Concertación, la simpatía por el pueblo cubano; un grado no pequeño de contestación; una tendencia, bien poco hinduista en un país cada vez más hinduista, de golpear a las vacas sagradas"

A Sule fallece el

La izquierda gobernante mantiene una postura de lealtad al Presidente Aylwin. El primer gobierno de la transición enfrenta circunstancias extremadamente complejas. Pinochet ha asumido, de acuerdo a las normas constitucionales aceptadas por la Concertación en los pactos de la transición, la Comandancia en Jefe del Ejército, el empresariado sospecha de la participación socialista en el nuevo gobierno y el poder de militares y empresarios exige y consigue de la Concertación que las tan objetadas privatizaciones de la época de la dictadura no sean examinadas por las nuevas instancias democráticas. No es éste un hecho menor, de acuerdo al balance de Gabriel Salazar y Julio Pinto:

"entre 1975 y 1989, el gobierno militar privatizó 160 corporaciones, 16 bancos y más de 3.600 plantas mineras, agro-industriales y fundos. Catorce de esos bancos debieron ser rescatados por el Estado cuando, a fines de 1981, el especulativo endeudamiento exterior los llevó al borde de la quiebra, junto a otras 90 grandes firmas. La emergente "nueva" clase capitalista reveló temprano que su expertise no era de autonomía productiva sino de dependencia especulativa, derivada acaso del hecho que la venta de empresas estatales se hizo castigando su precio real entre 27 y 69 por ciento, mientras que la sola venta de la CAP, Chilectra y Soquimich significó para el Estado una pérdida de US \$ 1.400 millones."

La derecha, por otra parte, se muestra impermeable a la idea de reformas constitucionales democratizadoras que supriman los senadores designados, modifiquen el sistema electoral binominal, terminen la inamovilidad de los comandantes en jefe y modifiquen el Tribunal Constitucional. Un acuerdo verbal, alcanzado durante las negociaciones para el plebiscito de 1989, sobre reformas a la constitución, para eliminar los senadores designados una vez electo el nuevo Congreso es simplemente desconocido por la dirección de Renovación Nacional, como señala Camilo Escalona:

"La entonces opositora Concertación dejó su suerte pendiente a la obtención en diciembre de 1989 de los 2/3 en ambas Cámaras, o a que Renovación Nacional cumpliera con su palabra "reformista" en el Parlamento que se inauguraba en marzo de 1990. Ninguna de ambas cosas ocurrió. No hubo los 2/3 en el Parlamento por el efecto combinado del sistema binominal y la existencia de los senadores designados, así como Renovación Nacional hizo absoluta dejación de su palabra "reformista"

solemnemente empeñada por las expresiones de sus máximos dirigentes de la época en uno de los “fraudes” políticos más ominosos de nuestra historia republicana.”

Se extiende una crítica de izquierda que estima esas negociaciones como “concesivas” y afirma que, producto de ellas, la Concertación ha abandonado su objetivo de plena democracia y transado con los “poderes fácticos”, militares y empresarios, una “democracia tutelada” A su vez, la visión de la izquierda concertacionista sobre los logros de los primeros años es positiva pero matizada. Se considera que se cumplió con los objetivos políticos, sobre todo en materia de economía, pleno empleo y funcionamiento democrático de las instituciones. Pero, dice R. Núñez, no se generaron las condiciones de fuerza para “*terminar la transición más rápidamente*”. El peso de las realidades, en particular la presencia del dictador y la fuerza de la derecha, impide los cambios de fondo que espera la izquierda. Un “desencanto”, piensa Núñez, afecta crecientemente la capacidad de movilización social de los partidos de la Concertación:

“Pero obviamente, como todo proceso político de este tipo, despertó un entusiasmo ilimitado en la gente, que esperaba transformaciones de fondo. Diría que muy a corto andar, la gente empezó a percibir que tales cambios no se iban a producir. Primero, porque Pinochet quedó como Comandante en Jefe, por lo tanto, como garante. Segundo, porque la derecha logró obtener una votación bastante significativa. Tercero, porque al partidizarse, como era la realidad de nuestro país, los partidos empezaron a ocupar el espacio de las organizaciones populares y de las organizaciones de la sociedad civil [...] El único movimiento que quedó de todo aquello fue el de derechos humanos [...] y eso provocó desencanto desde un principio [...] hubo una desmovilización que afectó notablemente la conciencia colectiva de la gente [...] se percibía una transición débil, y diría que la habilidad de don Patricio Aylwin y de sus ministros Edgardo Boeninger, Enrique Correa y Enrique Krauss hizo que esta situación no llegara más allá”

En palabras de una dirigente poblacional, R. Quintanilla, que se interroga por los significados de su rol en el Chile de estos años, el desengaño por la postergación de los objetivos democráticos es vivido como marginación:

“cuántos nos deben no solamente la vida, sino el mantener la esperanza, el organizarse para la sobrevivida y –otros muchos- el estar en el poder estos momentos. Nosotros fuimos actores principales en la lucha por la democracia y, sin embargo, ésta nos margina.”

LAS DISCREPANCIAS FRENTE A LA POLÍTICA DE CONSENSOS, LOS DERECHOS HUMANOS Y EL MODELO ECONÓMICO.

Lo que más profundiza la creciente separación entre los dos bloques de izquierda, uno en el gobierno y otro en la oposición, es la adhesión del PS y de otras fuerzas como el PPD y el PR a la llamada “política de los consensos”, objeto, en muchos casos, de insatisfacción en las propias filas de la izquierda concertacionista. La izquierda opositora es cáustica en su crítica como testimonian los textos de Tomás Moulián, para quien se está simplemente ante una capitulación frente al neoliberalismo:

“El consenso es la etapa superior del olvido. ¿Qué se conmemora con sus constantes celebraciones? Nada menos que la presunta desaparición de las divergencias respecto de los fines. O sea la confusión de los idiomas, el olvido del lenguaje propio, la adopción del léxico ajeno, la renuncia al discurso con que la oposición había hablado: el lenguaje de la profundización de la democracia y del rechazo del neoliberalismo”.

Mediante los consensos el gobierno de Aylwin busca favorecer acuerdos con sectores de derecha que permitan avanzar paulatinamente en la transición hacia un régimen democrático no tutelado por las FFAA y liberado de los aspectos más autoritarios de la constitución de 1980. La constitución contiene un entramado de normas que, en el hecho, garantizan a la derecha un veto parlamentario: para toda ley de importancia el gobierno requiere necesariamente negociar y atraer al menos algunos votos de derecha o de senadores “designados”, no electos, que han sido nominados por Pinochet antes de dejar el poder.

La agenda de los cuatro años de Aylwin es dominada por tres temas: las relaciones civil-militares y los derechos humanos, ambos estrechamente relacionados, y las modificaciones al modelo económico-social dictatorial. Durante el período las FFAA realizan varias acciones de sello sedicioso. En 1991 el ejército realiza un acuartelamiento general que provoca generalizada inquietud y obliga al gobierno a negociar el motivo principal de la advertencia militar: la investigación parlamentaria sobre un fraude atribuido al hijo de Pinochet que alcanzaba a varios millones de dólares. A esta razón concreta debía sumarse la molestia castrense por la creación de la Comisión Rettig y los funerales del presidente Salvador Allende realizados el 4 de Septiembre de 1990. Efectivamente, en esa fecha sus restos fueron trasladados desde el oculto lugar de sepultación al que fueron llevados inmediatamente luego de su muerte, en el Cementerio Santa Inés de Viña del Mar, hasta el Cementerio General de Santiago en un cripta especialmente construida para este efecto. El periodista Rafael Otano, ve en el acontecimiento el último acto allendista, su desaparición:

“La organización de este acontecimiento la llevó a cabo el gobierno con la colaboración de la familia del ex Presidente. No se quiso hacer un funeral de Estado, sino un acto oficial. En el primer caso, deberían haber estado presentes las Fuerzas Armadas, pero que ofreció realizar un responso en la Catedral de Santiago, por un hombre que no fue católico, pero que mostró respeto por todas las Armas, algo que ninguna de las partes quiso. La Iglesia Católica, por creencias. Aylwin, por encima de presiones, incluso de su propio partido, habló en el cementerio. (...) La multitud, conmovida y expectante, acompañó los restos del recordado Presidente. Fue el último acto allendista, la última marcha política con olor a los años 60 y 70. Por eso, quizás a los militares y a Pinochet les desagradó especialmente: vieron una posible resurrección del espíritu de la Unidad Popular, en lo que era nada más un acto emocional de nostalgia. El allendismo, que muchos creían que volvería como movimiento político, casi había desaparecido.”

A propósito de la equívoca justificación oficial entregada por el ejército, la provocación se conocerá como “ejercicio de alistamiento y enlace”. Tiene efímero desarrollo pero constituye, sin duda, una forma de intimidación dirigida especialmente contra la izquierda, en el gobierno y fuera de él, que impulsan una política de “verdad y justicia” en materia de derechos humanos.

En 1993, en ocasión de la reapertura de la investigación sobre el mismo caso, conocido como de los “pinocheques”, surge un nuevo acto de insubordinación en el ejército. Será conocido como “boinazo”, en referencia a las boinas negras de los soldados de fuerzas especiales que participan en un nuevo acuartelamiento y rodean el edificio del Ministerio de Defensa, frente a La Moneda. El episodio da lugar a confusas negociaciones y tiene como efecto un retroceso en la política de derechos humanos del gobierno.

El PS, el PPD y el PR impulsan una política de justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos, no obstante posiciones individuales de algunos de sus miembros que relativizan esta postura y que son consentidas por las direcciones partidarias. El PC, por su parte, es adalid de esta demanda y apoya las organizaciones de derechos humanos, constituidas sobre la base del empeño de los familiares de las víctimas, que con el repliegue

paulatino de la Iglesia Católica y otras iglesias involucradas en el tema, ven incrementada su responsabilidad y la importancia de su vocería. La principal es la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, fundada en los años 1974 y 1975, en plena represión, que preside la militante comunista Sola Sierra, secundada por quien será su sucesora luego de su muerte, Viviana Díaz, hija del dirigente comunista Víctor Díaz, y la dirigente socialista Mireya García, entre otros.

Aylwin, en cuanto asume, da pasos para ir despejando temas de la agenda de derechos humanos en una perspectiva reconciliatoria. Al día siguiente de instalarse en La Moneda dicta los decretos de indulto para “presos políticos” y al mes siguiente envía al Congreso un conjunto de leyes, que serán conocidas como “leyes Cumplido” por el nombre del Ministro de Justicia que las impulsa, Francisco Cumplido, destinadas a modificar diversos textos legales y favorecer el tratamiento de los presos no beneficiados por los decretos de indulto. A fines de abril Aylwin da otro paso decisivo: crea la Comisión de Verdad y Reconciliación o “Comisión Rettig”, llamada así por el nombre del jurista y político radical Raúl Rettig, quien preside un grupo de personalidades de todo el arco político. Entre ellas tendrán participación en los trabajos y en la redacción del informe final el historiador de derecha Gonzalo Vial, el penalista y ex presidente de Amnesty International, el concertacionista José Zalaquett, y el secretario de la Comisión el abogado Jorge Correa Sutil, un DC de perfil progresista.

A comienzos de junio surge la discusión sobre la propuesta llamada “Acuerdo-Marco” para avanzar en la reconciliación, que los investigadores Loveman y Lira caracterizan como intento de beneficiar a ambos lados, “terroristas” y “violadores de DDHH”:

“En estas circunstancias, los ministros Boeninger, Cumplido, Correa y otros consideraban con el secretario general de RN y experto en materia penal, Ricardo Rivadeneira, una propuesta de RN que contemplaba rebajas de penas para procesados y condenados por delitos cometidos durante el gobierno militar. Dichas rebajas de penas podían ser hasta de tres grados y con atenuantes, y se aplicarían a los violadores de derechos humanos que tuvieran “irreprochable conducta previa”. Además, en el caso de los uniformados, se barajaba la fórmula de caracterizar los delitos como de “violencia innecesaria con resultado de muerte” en vez de homicidio. Lo más importante en este proceso sería que la legislación propuesta beneficiara a los dos lados --a “terroristas” y a “violadores de derechos humanos”.”

Se inicia entonces un debate público. El diputado DC Andrés Aylwin sostiene que “*la impunidad no debe ser el precio de la libertad de los reos*”, las organizaciones de derechos humanos, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y parlamentarios y dirigentes socialistas rechazan la iniciativa.

En esa atmósfera se da a conocer el hallazgo de una fosa clandestina repleta de cadáveres en la zona de Pisagua, próxima al campo de concentración instalado por la dictadura inmediatamente después del golpe militar. El impacto en la opinión pública es enorme. Las organizaciones de derechos humanos y los partidos comunista y socialista y la Concertación expresan su indignación. La Iglesia Católica considera “injustificable” lo ocurrido. El ejército justifica los hechos sosteniendo que en 1973 había una guerra. Loveman y Lira recuerdan la oposición socialista al “acuerdo marco” que entonces se hace notar con fuerza:

“El 12 de junio un video sobre las exhumaciones en la fosa de Pisagua conmocionó a los legisladores que debatían las leyes Cumplido, la reconciliación nacional y la legitimidad de la amnistía de 1978. Clodomiro Almeyda, el presidente del Partido Socialista, y Luis Maira (PS) declararon que “los contenidos del llamado acuerdo-marco sobre las leyes Cumplido son lesivos para el objetivo de hacer verdad y justicia, planteado en el programa de la Concertación”. Agregó Jorge Arrate que “la

presencia de Pinochet en la comandancia en jefe del Ejército no contribuye a la reconciliación. Es un símbolo de división, en un momento muy doloroso y difícil”.

Durante todo 1990 la Comisión recoge testimonios e investiga los hechos. En enero de 1991 el Congreso despacha unas leyes Cumplido muy diluidas. El debate parlamentario es intenso. El senador DC Ricardo Hormazábal expresa:

“¡Prisionero político chileno, para nosotros no eres un héroe! ¡No usaste los medios que consideramos correctos! ¡Aquí está hoy, en manos de un Parlamento de gente que piensa distinto, la oportunidad de reintegrarse a la sociedad chilena! ¡Podrán algunos de ustedes fallar como lo hicieron con Edmundo Pérez Zujovic o con tantos otros! ¡Pero si sólo uno de ustedes se salva, habrá valido la pena, porque en lugar de vivir en la angustia del dolor y las tinieblas, nosotros somos hijos de la esperanza, gracias a Dios! Votamos que sí.”

En marzo, la Comisión Rettig finalmente emite un circunstanciado informe que pasará, más allá del rechazo de los sectores pinochetistas de las FFAA y de la oposición de derecha, a constituir una suerte de verdad consagrada, si bien limitada, sobre las violaciones aberrantes de los derechos humanos cometidas por la dictadura. Por haber afectado a decenas de miles de personas, el Informe estima imposible examinar en detalle los casos de tortura ni el drama del exilio, si bien deja expresa constancia de su carácter masivo e inhumano. En su conjunto el Informe es considerado por la izquierda como un valioso apoyo a la lucha por verdad y justicia. Al entregarlo a la luz pública, en un discurso de repercusión histórica el Presidente Aylwin pide en nombre de la nación perdón a los familiares de las víctimas:

“Yo me atrevo en mi calidad de Presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso, pido también solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden, y a todos los que hayan participado en los excesos cometidos, que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo”.

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos valora el Informe como “*un paso más hacia la meta*”. La reacción de las FFAA es negativa y la derecha política, en una actitud en general defensiva, continua estigmatizando a la izquierda como supuesto responsable del “marco” en el cual ocurrieron los hechos que detalla el informe.

Un mes después ocurre el asesinato del senador de la UDI e ideólogo de la dictadura militar Jaime Guzmán Errázuriz. En el período de Aylwin actúan todavía grupos militarizados insatisfechos con el curso negociado de la transición. Los generales Leigh y Ruíz, por ejemplo, son objeto de un intento de homicidio. Logra renombre periodístico por la espectacularidad y violencia de sus acciones la pequeña organización llamada Mapu Lautaro que ya tiene diez años de experiencia y ha logrado mantener lo fundamental de su estructura fuera del alcance de la represión de la dictadura.

Pero dos hechos adquieren particular relieve por su impacto político. Uno es el asesinato de Guzmán, a manos de un comando perteneciente al FPMR autónomo. El gobierno y la Concertación condenan tajantemente el hecho y el PS en particular realiza una condena al terrorismo, reafirma su adhesión a la democracia como espacio y límite de la acción política transformadora y coloca a disposición del gobierno para la acción anti terrorista a uno de sus dirigentes destacados, el cientista político Marcelo Schilling. Este, junto a los dirigentes DC Jorge Burgos y Mario Fernández, encabezan el Consejo de Seguridad Pública, conocido como la “Oficina”, cuyas funciones serán desbaratar los organismos de inteligencia ilegales de la dictadura que aún sobreviven e impedir las actividades de las organizaciones de izquierda que aún realizan actos “terroristas”. El PC, por su parte, observa un intento de instrumentar el asesinato para generar un cambio hacia la derecha en el cuadro político:

“Sacando dividendos políticos de un asesinato que hemos condenado desde el primer momento, porque queremos excluir la muerte definitivamente de la práctica ciudadana, se desarrolla una orquestada campaña para producir un vuelco hacia la derecha, que sepulte las verdades contenidas en el Informe Rettig y haga imposible la justicia en nuestro país.”

Meses después, en el siempre conflictivo mes de septiembre, el FPMR autónomo realiza una segunda operación espectacular: el secuestro de un hijo del magnate periodístico Agustín Edwards. Tras 145 días la familia debe pagar un rescate y el rehén es liberado. La izquierda pues aparece segmentada en tres: los partidos de gobierno que forman parte de la Concertación, el PC y sus aliados menores que integran el MIDA, y grupos armados de izquierda aún operativos, principalmente el FPMR autónomo y el Mapu Lautaro.

En 1993 se reabre el caso de los “pinocheques” en la Cámara de Diputados y la nueva insubordinación militar parece a algunos, con su persistencia, un hecho que amenaza repetirse y que es mejor evitar. El senador democristiano Gabriel Valdés, de destacada participación en la constitución de la Concertación y en el acercamiento entre democristianos y socialistas, declara:

“De aquí a dos o tres meses todo lo que se refiera al pasado debiera quedar en el pasado. (...) Si investigar significa llegar al sobreesimiento, qué objeto tiene investigar cuando hay Ley de Amnistía”.

El ministro Enrique Correa, por su parte, declara a “El Mercurio”:

“Es un propósito de este gobierno no dejar temas sobre derechos humanos para el próximo mandato”.

El escenario parece perfecto para una propuesta legislativa que implique un “punto final” a la cuestión de los derechos humanos. Cuando Aylwin se decide a plantearla, en agosto de 1993, provoca una enérgica oposición de los organismos de derechos humanos, los cuales son reprimidos “como en tiempos de la dictadura” según recuerda el periodista Rafael Otano

“El desconsuelo en la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) llegó al colmo con el discurso presidencial y con su proyecto de ley. Una manifestación realizada al día siguiente delante de La Moneda retrotrajo a sus participantes a los tiempos de la dictadura, pues Carabineros irrumpió con violencia y dos mujeres históricas del colectivo, Carmen Vivanco y Silvia Muñoz, fueron apaleadas y quedaron lesionadas con huesos rotos. El día 11 un nutrido grupo de la AFDD iniciaba una huelga de hambre [...] El ambiente estaba algo sombrío hasta que apareció Tencha Bussi. A su vista, un largo aplauso rompió los protocolos. Emocionada, la viuda de Allende modeló la frase exacta: “Ustedes son el dolor de Chile”. Fue un momento cumbre del sicodrama de los derechos humanos. Algunas participantes recordaban perfectamente aquellas huelgas de hambre del 77, 78 y 79, las manifestaciones, los encadenamientos. Nadie hubiese imaginado que esto se repetiría en democracia”.

El proyecto gubernativo, que pasa a ser conocido como “ley Aylwin” debe enfrentar, aparte la movilización del movimiento de derechos humanos, la de buena parte de la izquierda. La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) elabora las críticas al proyecto y sus indicaciones parlamentarias y, en general, los abogados vinculados al movimiento de los derechos humanos constituyen una barrera contra el proyecto, como registran Loveman y Lira:

“El equipo jurídico de FASIC incluía a Verónica Reyna, Pamela Pereira, Nelson Caucoto, Héctor Salazar, Alfonso Insulza y Alberto Espinoza. Algunos de ellos habían trabajado antes en la Vicaría de la Solidaridad. Tenían amplia experiencia en los casos de derechos humanos, incluso en casos que involucraban a personal militar [...] Pamela Pereira, abogada de derechos humanos, jugó un rol clave dentro del Partido Socialista al oponerse a la “ley Aylwin”. Evaluó la propuesta como un error

político, inspirado en parte por las presiones ilegítimas ejercidas mediante el boicazo del 28 de mayo de 1993”.

En el gobierno y el congreso el debate es tenso, finalmente, la “ley Aylwin” es retirada por el gobierno y la iniciativa caduca. Los mismos Loveman y Lira relatan la dura discusión que tiene lugar:

“El Presidente retiró la “urgencia” para el proyecto legislativo. Sus asesores analizaban las razones de su fracaso y las implicancias para la coalición de gobierno. Ricardo Lagos, resumiendo la posición del Partido Socialista, comentó que la oposición buscaba la impunidad para las violaciones de los derechos humanos aunque algunos de ellos, ahora legisladores, habían participado en el gobierno militar y deben saber el destino de los desaparecidos. Los socialistas insistían todavía en la investigación completa de cada caso, en la justicia civil, que no hubiera punto final mientras el destino de los desaparecidos no se descubriera, y que no podía haber reserva completa sobre los victimarios. Algunos legisladores del PPD y de la Democracia Cristiana compartían esos fundamentos”.

La suerte de los actores sociales durante los años noventa es azarosa y difícil. Varios pierden la vitalidad que habían tenido bajo la dictadura, en parte por la reconstitución orgánica de los partidos ya legalizados, en parte porque no hay políticas persistentes de fortalecimiento de la sociedad civil. Sin embargo, durante el gobierno de Aylwin el sindicalismo logra un nuevo estatuto legal, más apropiado a la apertura de condiciones democráticas y a los convenios internacionales. Se legitima y estabiliza la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cuyas máximas figuras durante los años noventa son el dirigente textil democristiano Manuel Bustos, quien la presidirá hasta avanzado el decenio, la profesora María Rozas, democristiana, los dirigentes comunistas de profesores Jorge Pavez y de los gremios de la salud Humberto Cabrera, y los dirigentes socialistas Roberto Alarcón, funcionario de la salud, Raimundo Espinoza, que preside la fuerte Confederación de Trabajadores del Cobre, Guillermo Cortés, panificador, y el dirigente gráfico Arturo Martínez. Martínez accederá a la presidencia del organismo en el año 2000. En abril de 1990, la dirección de Bustos y Martínez logra un acuerdo con la Confederación de la Producción y el Comercio para aumentar el sueldo mínimo a \$26.000, con lo cual –pese a lo modesto del monto- establece un precedente de compatibilidad entre aumentos salariales y crecimiento de la economía, que los empresarios persistirán en negar cuantas veces puedan.

**MANUEL BUSTOS HUERTA:
obrero, demócrata cristiano, luchador social.**

Manuel Bustos nace el 2 de diciembre de 1943 en San Enrique, pueblito rural cercano a Santo Domingo. Hijo de Juan Pontigo y de una joven campesina cuyo nombre no fue retenido por la historia, es adoptado al nacer por Amador Bustos y Florencia Huerta. Don Amador es administrador de un fundo y la madre desempeña las labores habituales entre las mujeres de los campesinos pobres. El padre biológico de Manuel le acompañará siempre. Manuel se casa dos veces. De su primer matrimonio, con Elsa Huina, tiene dos hijas, mientras que del segundo, con la periodista Myriam Verdugo, nacen Manuel y Andrea.

Bustos concurre a la escuela del fundo en que trabajan sus padres y cursa allí toda la educación primaria. A los 13 años deja la escuela para dedicarse a las labores agrícolas y ayudar a su familia. Más tarde, aprovechando el servicio militar, continúa sus estudios hasta segundo año secundario. En 1963 se traslada a Santiago, donde luego de trabajar en varios oficios entra a la empresa textil Sumar como mecánico de mantenimiento. Antes de cumplir un año ya es delegado sindical. Paralelamente se ha formado con estudios de mecánica en INACAP, de economía en el Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales (ILADES) y de acción sindical en la Vicaría de la Pastoral Social.

Católico practicante, recién llegado a Santiago se relaciona con la DC y participa en cursos para premilitantes. Ingres a poco tiempo a este partido, y se vincula a los sectores “de izquierda” que representa Radomiro Tomic. Milita toda su vida en la DC, donde llega a ser dirigente y vicepresidente nacional a fines de los años 80.

En 1969 es elegido presidente del Sindicato de Trabajadores de Sumar, cargo que desempeña hasta 1986. En las elecciones generales de la CUT, en mayo de 1972, es elegido dirigente nacional. En la CUT de esos años se le recuerda como un activo partidario del diálogo con la izquierda y de la unidad de los trabajadores.

El 11 de septiembre de 1973, Manuel es además dirigente de la Federación Textil. Acompaña entonces el intento de sus compañeros por resistir el golpe, evacúa heridos en la ambulancia de la empresa y es detenido, llevado al Estadio Chile y Estadio Nacional,

maltratado, torturado y encarcelado. Inmediatamente de liberado de la cárcel, por intervención del cardenal Silva Henríquez, retoma sus actividades sindicales y se vincula, durante 1974, a las nascentes expresiones de oposición sindical.

Participa activamente en diversas iniciativas de organización del movimiento sindical, actividades como las de la Fundación Cardijn, el Grupo de los Diez y la CNS, de la que es fundador y presidente. Es detenido varias veces. A fines de 1982 es desterrado. Retornará un año después para reasumir la presidencia de la CNS y asumir la del CNT. Se transforma entonces en un decidido impulsor de las protestas nacionales contra la continuidad de la dictadura. Es ya una figura nacional de la lucha democrática y el dirigente obrero más reconocido por su clase. Al hacer un llamado en 1986 a la movilización de los trabajadores, emite un pronunciamiento nítido sobre su concepción unitaria: *“nunca nos vamos a convencer de que las razones ideológicas sean más fuertes que los intereses comunes de los trabajadores”*

Llega a ser vicepresidente de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres (CIOSL) y, en 1990, miembro del Consejo de Administración de la OIT. De él dirá el presidente R. Lagos:

“Manuel -qué duda cabe- fue un líder de los trabajadores, fue un hombre que encarnó la esperanza del movimiento sindical, pero junto a ello tuvo la capacidad de mirar más allá de los intereses de los trabajadores, entendiendo que llega un momento en que los intereses de los trabajadores se confunden con los intereses de Chile, del país en su conjunto.”

En 1988 Manuel Bustos es fundador y primer presidente de la CUT. En 1997 es elegido diputado y en esa calidad presidirá la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Víctima de un cáncer cerebral, fallece el 27 de septiembre de 1999. El recuerdo de sus luchas por la justicia y la democracia y su contribución a la unidad de la clase obrera lo ubican en un sitio propio en la memoria de la izquierda.

La CUT es escenario de la confrontación entre socialistas, radicales y demócrata cristianos, más proclives a negociar las políticas gubernativas, y el sindicalismo comunista que progresivamente va adoptando posturas de radical oposición, a veces apoyados por sectores socialistas. La mayoría concertacionista de la CUT elabora, sin embargo, una cautelosa estrategia de entendimientos básicos con las direcciones empresariales y acuerdos salariales con el Estado, y concuerda modos de convivencia a través de procesos de diálogo y concertación social. Al mismo tiempo, la CUT intenta fortalecer el movimiento sindical y librar batallas al nivel de las empresas para mejorar los derechos laborales muy deteriorados durante la dictadura. En una intervención el 1º de mayo de 1992 y tras la consigna de *“un sindicalismo moderno con fuerza propia”*, Manuel Bustos explicita los contenidos principales de lo que será la política de la central en el decenio. Subraya entonces la reforma de la legislación laboral sobre contrato de trabajo, negociación colectiva y derechos sindicales, afirma el apoyo al gobierno en materia de crecimiento económico y demanda un mayor énfasis en el combate a la pobreza, la mejora del salario mínimo, un seguro de desempleo y una educación para el trabajo cuya primera concreción sea la *“recuperación de INACAP”* como servicio público. *“La CUT tiene una visión de país en función de la democracia y de los intereses comunes a todos los chilenos”*, recalca. Señalará finalmente que para los trabajadores la modernidad significa la igualdad:

“Los trabajadores somos los primeros en propiciar la modernidad. Sabemos que mientras luchábamos contra la dictadura, en Chile y en el mundo se producían cambios muy profundos. Las transformaciones de la ciencia y la tecnología han cambiado las relaciones de producción. Nos obligan a una revisión muy a fondo de la manera de hacer sindicalismo. Pero no aceptamos una supuesta modernidad que solo beneficia a unos pocos, a costa de generar condiciones de pobreza para la inmensa mayoría. Para nosotros, la modernidad debe significar una mejor calidad de vida y una distribución equitativa de los frutos del desarrollo. La política económica neoliberal no es moderna. Es la vieja y anticuada política del chorro, que solo provoca injusticias y desigualdades. Los trabajadores tenemos que elaborar una política alternativa que se funde en tres grandes pilares: Democracia, Desarrollo y Distribución”

El gobierno de Aylwin realiza los primeros ajustes significativos en el modelo económico social establecido por la dictadura. Uno de ellos consiste en modificaciones a la ley laboral destinadas mejorar la protección del trabajador, aprobadas luego de trabajosas negociaciones con los parlamentarios de derecha, que en muchos aspectos mutilan las propuestas originales. Así ocurrirá con todos los proyectos de ley importantes: los parlamentarios de derecha,

beneficiada por el sistema electoral binominal y por nueve senadores “designados” por Pinochet antes del término de su gobierno, obligarán al gobierno a negociar si es que desea aprobar sus leyes. En el marco de la política de los consensos, la Concertación deja de lado sus reparos a los procesos privatizadores realizados por la dictadura y nunca emprende una revisión a fondo. Denuncias periodísticas, como las de María Olivia Monckeberg, no tienen eco suficiente o demoran largos años en ser publicadas.

En especial, el gobierno levanta un tema que será central durante el decenio: el de la pobreza y la equidad. En el primer cuatrienio de los noventa la economía crece a tasas elevadas, la inflación disminuye y el empleo alcanza los niveles más altos del decenio. Las políticas sociales y el buen comportamiento de las grandes variables económicas hacen posible una disminución del porcentaje de población bajo la línea de pobreza. Además, el gobierno hace un importante esfuerzo para mejorar la calidad y equidad de la educación, mediante significativas inversiones y nuevos programas.

La izquierda no concertacionista, sin embargo, realiza un balance negativo de la gestión de Aylwin en materia económica. En ese sentido, el economista Hugo Fazio estima que “*hizo suyo el modelo económico de la dictadura*”:

“Los objetivos programático en un alto porcentaje no se cumplieron o se adoptaron medidas en contradicción con ellos. Los propósitos de justicia social, participación ciudadana y autonomía nacional entraron en contradicción absoluta con un modelo económico profundamente concentrador, antinacional y antidemocrático.”

Varios socialistas participan en las tareas gubernativas en áreas claves: Enrique Correa, como Ministro Secretario General de Gobierno, pieza fundamental en la “política de los consensos” y en la negociación con el ejército, Carlos Ominami en Economía, y Ricardo Lagos y Jorge Arrate en Educación, entre otros. El radical Enrique Silva Cimma ocupa durante los cuatro años el Ministerio de Relaciones Exteriores.

No obstante los logros en materia de políticas sociales y la responsabilidad y hasta cautela con que las direcciones políticas y de los movimientos sociales afrontan la transición durante la presidencia de Aylwin, la acumulación de esperanzas insatisfechas durante la dictadura, depositadas ahora en el renacer democrático, incentiva acciones desde la base social. Tal es el caso de los pobladores que en 1992 protagonizan la toma de terrenos más importante del decenio en la comuna de Peñalolén, donde establecen el campamento “Esperanza Andina”. Una de las dirigentes, de nombre Olga, describe el momento crucial de la “neutralización” de las fuerzas de orden requerida por la amplitud de la movilización:

“Era un tremendo hormiguelo de gente que había el dieciocho en la noche. Entonces todo ese movimiento alertó a carabineros, que vino como tres veces en la noche a preguntarme: “Señora Olga, sabe que hay rumores de “toma” y ¿será verdad?” Y yo decía: “No, capitán, no creo, porque yo habría sabido y hemos estado en reunión casi toda la tarde y no ha pasado nada”, y tenía un montón de gente detrás de nosotros... Así me lo engañé toda la noche. Pero ya en la mañana se dejaron caer como a las seis de la mañana, y nosotros habíamos buscado hartas estrategias, yo salí para allá para el lado de la municipalidad y otros pa’ otro lado, cosa de despistar a la gente. Sí, si a mí me veían en la municipalidad no iban a creer que iba a ser una “toma”.

Las juntas de vecinos y todo tipo de organizaciones comunitarias proliferan sobre la base de viejos y nuevos padrones asociativos. Su relación con los partidos políticos en la democracia en proceso de reconstitución será ambigua, como la misma Olga lo expresa al definirse como parte de una izquierda crítica de sus partidos :

“Porque siendo nosotros de izquierda, no tenemos partido político. Pero nos consideramos de izquierda porque somos... porque es nuestra clase, porque somos pobres, porque somos de la “pobla”, somos la “pobla”. Entonces nos consideramos de izquierda porque tenemos también ideas de izquierda, pero los partidos políticos de izquierda o derecha han dejado mucho que desear en la comuna.”

La creación de un nuevo servicio público, el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), con categoría de ministerio, alienta esperanzas en lo que respecta a los derechos de las mujeres, pero no significa un mayor desarrollo del movimiento por su igualdad social. Por el contrario, mientras la acción desde el estado consigue reformas legislativas como la penalización de la violencia doméstica, la eliminación de los hijos ilegítimos y otras, en el mundo de las organizaciones sociales se produce un estancamiento si no un retroceso. En la fase final de lucha contra la dictadura el movimiento de mujeres había sido un actor político reconocido. Sin embargo, como señala Teresa Valdés, la restauración democrática significó una pérdida de vitalidad y particularmente de visibilidad de los actores del movimiento femenino:

“Al iniciarse la transición democrática, el país contaba también con un importante movimiento de mujeres, más extendido y diverso que nunca. Cientos de grupos de mujeres y numerosos organismos no gubernamentales (ONG), organizaciones sociales y políticas se distribuían en todo el país. ... Al finalizar la dictadura, organizaciones de derechos humanos, pobladoras, profesionales, feministas, sindicalistas y campesinas, y mujeres de partidos políticos se articulaban en el “MEMCH 83” y en “Mujeres por la Vida”, así como en una serie de coordinaciones similares a los largo del país.”

En la esfera estudiantil las federaciones se movilizan en torno a los temas de becas y créditos universitarios, cuyo régimen es sustancialmente mejorado por una nueva ley, pero actúan con prudencia. Muchas de ellas son dirigidas por militantes socialistas o demócrata cristianos, que buscan llegar a acuerdos con las autoridades del primer gobierno democrático.

En el Congreso, electo por voto popular por primera vez en diecisiete años, actúan destacados dirigentes socialistas. Son senadores, entre otros, el ex Ministro de Agricultura de Allende Rolando Calderón y el ex presidente del PS Ricardo Núñez, ambos por zonas de historia y tradiciones de izquierda, como son Magallanes y Atacama, respectivamente. Lo es también Jaime Gazmuri, por la zona de Talca y Linares, donde antaño había impulsado la reforma agraria. En la Cámara de Diputados ejerce la presidencia el socialista José Antonio Viera Gallo y, luego, el también socialista Jaime Estévez. El sistema electoral binominal y el rechazo de la DC a la participación de candidatos del partido PAIS en listas de la Concertación, en 1989, ha dejado fuera del Congreso al PC y a otros grupos de izquierda. Sólo el Partido Humanista, entonces integrante de la coalición, logra elegir diputada a Laura Rodríguez. Más tarde los humanistas dejarán el gobierno y la Concertación formulando críticas desde la izquierda.

En los últimos meses del gobierno de Aylwin ocurre un momento de gran tensión entre el PS y el presidente, a propósito del asilo y expulsión de la embajada de Chile en Moscú del ex jefe de estado de la RDA Erich Honnecker. Este último había sido solidario con los chilenos perseguidos por la dictadura y especialmente con los socialistas chilenos. El PS, además, ve comprometido en el hecho al embajador en Moscú Clodomiro Almeyda, ex presidente del partido, y plantea el respeto al derecho de asilo. El gobierno, en definitiva, resuelve que Honnecker no es acreedor a ese derecho y que debe abandonar la sede diplomática chilena.

LAS IZQUIERDAS ANTE LA INALCANZABLE RECONCILIACIÓN Y LA ACCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Para la elección presidencial de 1993 la izquierda concertacionista levanta la candidatura de Ricardo Lagos. Hombre educado en grandes centros educacionales laicos como el Instituto Nacional y la Universidad de Chile, abogado, economista graduado en la Universidad de Duke, Estados Unidos, Lagos había regresado del exilio a fines de los setenta para desarrollar durante la dictadura un activismo audaz y permanente tras el objetivo de fortalecer una opción democrática. Nominado presidente del PPD en formación en 1987, adquiere un fuerte liderazgo en el plebiscito de 1988. Es reconocido militante tanto de ese partido como del PS, condición que mantendrá en el tiempo siguiente, y con el apoyo de ambos partidos proyecta una alternativa de izquierda dentro de la Concertación. Su candidatura no goza, sin embargo, de aprobación unánime ni genera el fervor esperado, como él mismo recuerda:

“La DC no aceptaba las primarias y, por lo tanto, el PS y el PPD estaban decididos a desechar esa opción. Cuando me informaron, les dije que yo seguiría adelante con mi campaña y que llamaría a los independientes a apoyarme. Si no había primarias, mi nombre estaría en la papeleta de diciembre [...] Esa noche Germán Correa me llamó y me dijo que había meditado mucho mis planteamientos y que él no podía ir al Comité Central a proponer un voto en contra de mi posición. Me dijo que informaría de inmediato a la DC que o había primarias o seguiríamos hasta diciembre”.

Ante el ultimátum, la DC acepta elecciones primarias de la Concertación, pero sobre bases de una votación restringida, con un límite al número de independientes que cada fuerza puede inscribir en el padrón electoral. La fórmula da, según todos los especialistas, las mejores posibilidades al candidato DC. Efectivamente, Lagos es derrotado en las primarias por Eduardo Frei Ruíz Tagle.

La izquierda fuera de la Concertación se divide en tres candidaturas: el PC y sus pequeños grupos aliados, agrupados en el MIDA, levantan la de Eugenio Pizarro, sacerdote católico destacado por su defensa de los derechos humanos y de los sectores sociales más pobres. El Partido Humanista levanta la candidatura de Cristián Reitze, y un conglomerado de grupos de tendencia ecologista inscriben la del economista de perfil “alternativo” Manfred Max Neef.

El triunfo de Frei en las presidenciales, con un 58% de los votos, da comienzo al segundo gobierno concertacionista. El PS adquiere una particular importancia en el primer gabinete ministerial con la presencia como Ministro del Interior del presidente del partido, Germán Correa. En el área social los socialistas asumen con Luis Maira, hasta ese momento secretario general del partido, el Ministerio de Planificación, a cargo de los programas de erradicación de la pobreza, y con Jorge Arrate, en Trabajo, para impulsar una reforma laboral que extienda y dé vigencia a los derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga. Desde el Ministerio de Obras Públicas, Ricardo Lagos impulsará un programa de desarrollo de infraestructura que convocará el interés de capitales privados nacionales e internacionales. En un segundo gabinete, a fines de 1994, G. Correa es reemplazado, con el disgusto del PS. El sociólogo PPD José Joaquín Brunner cumplirá entonces un rol político de primera línea como Ministro Secretario General de Gobierno,.

Destinados sus máximos dirigentes al gabinete, el PS debe designar nuevas autoridades. Asume como presidente el diputado Camilo Escalona, jefe de la corriente interna más numerosa, llamada “Nueva Izquierda”, que agrupa principalmente a parte del llamado “almejdismo”. El juego de corrientes, establecidas ya como configuraciones permanentes al interior del partido, llevará en el período siguiente a la alternancia en la dirección partidaria

entre Escalona y el senador Ricardo Núñez, principal figura de la llamada “Megatendencia”, que agrupa a socialistas identificados con la “renovación” de los años ochenta.

Hacia 1994 y en vísperas de un proceso electoral interno, el PPD ha perfilado ya su carácter de partido atípico, “*que lo hace ser y no ser de izquierda*” según señala el análisis del politólogo Enrique Cañas, fundado en opiniones del dirigente Jorge Molina:

“El partido representa una nomenclatura contradictoria, que lo hace ser y no ser de izquierda. De acuerdo a su declaración de principios, se concibe a sí mismo como sustancialmente liberal-progresista y partidario de un socialismo democrático. Su inspiración fuertemente pragmática lo hace proyectar una identidad más o menos casuística entre un izquierdismo moderado y un liberalismo acentuado, que se posiciona en un eje de acción societal multicultural. Esa es la razón por la cual el PPD recela de los discursos universalizantes y abstractos, de las certezas absolutas y de las identidades cerradas, lo que lo impulsa a practicar la política asumiendo la multiplicidad y variedad de la vida social”.

La izquierda no “concertacionista”, que una vez más en 1993 resulta excluida del Congreso Nacional, vuelca su fuerza a los movimientos sociales. El PC ha logrado detener la crisis que le ha significado una pérdida considerable de militancia, en particular con la realización de su XVI Congreso en 1994, en que Gladys Marín asume la jefatura del partido. A partir de la Conferencia Nacional de 1990, el PC ha lanzado una ofensiva para recuperar posiciones en las organizaciones de masas y, de acuerdo a su tradición histórica, ha logrado consolidarse en los movimientos sindical y estudiantil.

En particular, los estudiantes se movilizan crecientemente durante el gobierno de Frei tras exigencias de financiamiento de la educación superior y fortalecimiento de las universidades públicas o, los más radicales, la gratuidad de la enseñanza universitaria. Las Juventudes Comunistas controlan numerosas federaciones universitarias, entre ellas la tradicional FECH, y desplazan a la Juventud Socialista como fuerza principal en el mundo estudiantil. No obstante, para vastos segmentos juveniles la mística social y política de los universitarios de los ochenta ha quedado atrás, sustituidas en la cultura de los nuevos jóvenes por el retorno a la vida privada y el acceso individual al mercado. Se recuerda que conjuntos exiliados que hicieron la historia de la “nueva canción” como Intillimani, Quilapayún, Los Jaivas o Illapu, en su mayoría de militancia comunista, llegan al país, convocan a los jóvenes y se comprometen vitalmente con la política democrática, separándose del PC. “*Un país llevo perdido/ cuando duermo se me aparece/ en mis sueños como enemigo*”, dice el verso de Eugenio Llonca hecho música por Intillimani antes de regresar de su exilio. Pero el emblema políticamente rebelde de *Los Prisioneros* ya no está y, sin la mística de la década anterior, el rock progresista vive los desengaños del paso de la lucha social a las realidades del poder. El nuevo símbolo rockero de los noventa está en *Los Tres*, con Ángel Parra hijo, a veces reencontrado con su tío abuelo Roberto. *Los Tres* cantan con ironía el desengaño cuando observan la cómoda sobrevivencia de militares represores, en “Sudapara”:

“”Hablen algo interesante”/ nos dijo”/ “Hablen algo más”/ se calló/ [...] Todo lo interesante/ de hablar/ Lo que hablo/ te hará soñar/ Como un militar/ Como un militar/ mirando cuadros de Dalí/ Esperando volver/ nunca más.”

Comienzan también a surgir entre los estudiantes universitarios grupos de izquierda que rechazan la militancia en los partidos clásicos y se sitúan en posturas próximas a un nuevo anarquismo o autonomismo de base asambleística. Entre ellos destacará “La Surda”, movimiento que al finalizar la década tendrá implantación en universidades públicas y en algunas privadas. Crítica del “sectarismo” y la “agresividad” de las juventudes comunistas,

así como del “*desmantelamiento universitario que ha traído la política neoliberal*” de la Concertación, la Surda se pronuncia por un diálogo, desde posiciones de fuerza, entre el movimiento estudiantil, el gobierno y los estamentos universitarios, que reconozca la crisis del sistema de educación superior y recupere la universidad pública. Muestra de la modernidad y tradición que parecen alimentar la ideología de esta corriente estudiantil es el siguiente rescate “humanista” del Che:

“Así la principal herencia que rescatamos del Che, el más universal de los latinoamericanos del siglo XX, es la de luchar por el futuro con fuerza e inteligencia, sin temor a los diagnósticos más duros, sin ilusiones baratas, pero con esperanza en el futuro. Aunque es una opción difícil es, en definitiva, la única que realmente nos hace más humanos. Por eso, el Che es una figura que exhorta y convoca a lo mejor que hay en cada uno de nosotros en pos de esa descomunal pero más noble de todas las tareas: la transformación de la sociedad en aras del mejoramiento humano”

En algunos centros universitarios la Concertación todavía logra votaciones importantes, muchas veces encabezada por socialistas, pepedistas o independientes de izquierda. Pero una masa de magnitud creciente se mantiene indiferente, en concordancia con un fenómeno que tiene dimensión nacional: cada vez hay menos ciudadanos potenciales que hacen efectivos sus derechos y el porcentaje de jóvenes que no se inscriben en los registros electorales es enorme *** (una cifra, para ilustrar).

En la esfera educacional el movimiento de docentes, conducido por el Colegio de Profesores, que el comunista Jorge Pavez llega a presidir con altas votaciones, conduce una política que combina negociación y medidas de fuerza y logra convenir con el gobierno importantes mejoramientos salariales para el profesorado y programas destinados a elevar la calidad de la educación pública primaria y secundaria. La actuación de Pavez en el debate político y teórico trasciende el movimiento sindical. Situado en una posición de autonomía respecto de su partido, que antaño habría sido imposible, y dado el peso específico del sector sindical que lidera, Pavez sostiene opciones políticas que, por ejemplo, le permiten interactuar con la Concertación. Invita así a los socialistas a salir de su “posibilismo” y a “reconceptualizar la izquierda” superando la hegemonía de la DC en la Concertación. Este discurso comunista emergente reivindica un rol autónomo del movimiento social respecto de los partidos, como hiciera el PS, y no se caracteriza ya por invocar la palabra “revolución”:

“La relación entre sindicato y partido político debe resolver definitivamente la práctica del dirigente sindical “correa de transmisión” de su partido [...] Pero la autonomía debe avanzar, resuelta la situación anterior, a un rol que no sólo signifique el clásico papel reivindicativo, sino que avance en la elaboración de propuestas propias y efectivamente autónomas [...] incorporando, además, como elementos importantes de su labor y acción, el contenido ético, la creación de una cultura propia que sea capaz de aglutinar en un solo rostro los trazos dispersos de identidad que se segmentan y bifurcan como producto de las transformaciones que el capitalismo impone en el mundo del trabajo [...] la preocupación por un medio sano y una economía sustentable, el desafío y esperanza de futuro de los jóvenes, el sentir y razón de los pueblos originarios, la singularidad y aporte específico del mundo de la mujer, y todos los movimientos sociales que pugnan, en la actual realidad, por ascender a niveles superiores de vida, de mayor y más completa humanidad. Es en este terreno en donde las ideas de izquierda y socialistas mantienen plena vigencia [...] La izquierda, la portadora de sueños, por los que tantos otros entregaron su vida y esfuerzos, no ha muerto [...] y convoca e ilumina la esperanza de muchos que comienzan a ver en ella la posibilidad concreta de vivir mejor. Así de simple. Vivir mejor que ahora, y eso supone, aunque en toda mi intervención no hayamos empleado jamás la palabra revolución, eso supone la lucha, la ruptura con el sistema y el ganar las conciencias de millones que están, sin saberlo, sosteniendo un sistema que los oprime y que es la causa de todos sus problemas.”

Aparte de los profesores, se movilizan cada año los trabajadores de la salud pública, cuyo principal dirigente es el comunista Humberto Cabrera, y, en varias ocasiones, los médicos, dirigidos por el futuro diputado PPD Enrique Accorsi y el socialista Juan Luis Castro, en protesta por sus condiciones laborales y por el estado del sistema de salud. Los empleados fiscales, organizados en la legendaria Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que presidiera Clotario Blest y Tucapel Jiménez, y que es ahora encabezada por el socialista Raúl de la Puente, acompañado entre otros por la dirigente de la CUT, también socialista Ana Bell, negocian, en un proceso no regulado por ley, su participación en los programas de modernización del Estado, aumentos salariales y condiciones de trabajo. El sindicalismo ha tenido a comienzos de los años noventa, un cierto auge, pero luego la afiliación sindical se reduce y estabiliza. No obstante, este actor tradicional de la lucha social sigue levantando criterios unitarios y muestra, a pesar del cuadro normativo desfavorable a la proliferación de organizaciones laborales, vitalidad y empeño. Un experto en el sindicalismo chileno, Guillermo Campero, asesor de la CUT durante la dictadura y luego de los Ministros del Trabajo de la Concertación, ha evaluado la etapa cumplida por los sindicatos durante el decenio “concertacionista” como una muestra de la potencialidad histórica de la acción colectiva de los trabajadores:

“el sindicalismo ha sobrevivido a la feroz batalla librada en su contra por el neoliberalismo ortodoxo, que lo define sólo como un obstáculo al libre funcionamiento del mercado y que ha buscado eliminarlo cuando ha tenido alguna oportunidad de hacerlo. Esta primera victoria no es trivial. Lo que ha hecho es demostrar la validez histórica, sociológica y política de que no existe una sociedad sin actores y, por tanto, sin negociación de intereses. Y ello no es un dato menor, pues revela la potencialidad de la acción colectiva y la permanencia cultural de ella en el mundo del trabajo.”

En esos años, la CUT realiza varios congresos, el primero en octubre de 1991 con la presencia del presidente Aylwin. Al retirarse M. Bustos de la presidencia en 1996, es sucedido por el dirigente PS Roberto Alarcón y este, en 1998, por Ethiel Moraga, del PC. La central está a punto de quebrarse hasta que se establece la elección de su dirección nacional mediante un sufragio directo de todos los dirigentes sindicales del país. Así en las elecciones del año 2000 se presentan cuatro listas, resultando primera la de la Concertación (DC, PR, PPD y parte del PS) con un 47.6% de los votos, luego la llamada “Autonomía” (socialistas liderados por A. Martínez) con un 26% y la comunista con un 24.7%. Los socialistas han concurrido divididos y A. Martínez es elegido presidente de la Central en alianza con los comunistas.

Durante el período de Frei continua su curso, iniciado en el gobierno anterior, el cierre progresivo de las faenas carboníferas en la región de Concepción. El proceso es difícil, las condiciones económicas en el mercado de energía han hecho perder competitividad a las empresas carboníferas y la rentabilidad a las minas de carbón es baja o simplemente negativa. Su cierre es un fuerte golpe a una cultura obrera más que centenaria que se considera emblemática del movimiento de los trabajadores. Los trabajadores de Lota y de Coronel, y sus familias, luchan hasta el fin por mantener su fuente de trabajo y, en los años siguientes, por mejorar las condiciones de su retiro, generando llamativas movilizaciones en Concepción y en Santiago.

Al promediar el gobierno de Frei, el uso del espacio público sigue siendo un tema particularmente conflictivo. Las restricciones establecidas a las manifestaciones masivas generan a veces dificultades políticas y otras enfrentamientos de estudiantes o trabajadores con fuerzas policiales que cargan como herencia su formación y estilo propios de diecisiete años de dictadura. Una de esas ocasiones suscita la renuncia a la Intendencia de Santiago del

DC Fernando Castillo Velasco, desautorizado luego de conceder permiso a manifestantes de izquierda para desfilar próximos a La Moneda en homenaje a la memoria de Allende.

Pero, al igual que en el gobierno de Aylwin, la agenda del gobierno Frei es dominada por las tensiones derivadas del nuevo marco de relaciones civil-militares y los temas de derechos humanos. Es notorio que en amplias capas de la población logra imponerse la fuerza de la memoria colectiva, más allá del aliento y promoción del olvido que, según pareciera evidente ya en 1994, acomoda a diversos sectores de la sociedad, se trate de personas o grupos comprometidos en las violaciones de derechos humanos o de aquellos que, declarándose antidictatoriales, proclaman una acelerada reconciliación. Explica el hecho la historiadora María Eugenia Horwitz:

“El malestar social desafía todo saber que haya dado por concluidos los pasados incómodos, y particularmente incómodos. En Chile sentimos y presenciamos el conjunto de estos malestares, el olvido se perfora por el combate de algunos, la consternación de muchos y la imposibilidad desde lo público de impedir percibir y nombrar a las víctimas desaparecidas”.

Frei da respaldo a los Tribunales para que hagan justicia en los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, al menos hasta el proceso a Pinochet en Londres, y actúa con severidad frente a casos notorios de oficiales de las FFAA vinculados a este tipo de delitos. La línea principal del gobierno, sin embargo, es una convocatoria permanente a la “reconciliación” sobre la base del conocimiento de la verdad. Uno de los principales objetivos explícitos del gobierno de Frei es superar las divisiones del pasado para abocarse a las tareas nacionales del crecimiento económico, la erradicación de la pobreza y la modernización del Estado.

La severidad de Frei con uniformados comprometidos con crímenes se hace manifiesta al mes de iniciado el gobierno, cuando el Ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma solicita la renuncia al Director General de Carabineros, a raíz de que el juez Milton Juica se dispone a procesarlo por su supuesta participación en el caso “de los degollados” ---Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel Parada---. La iniciativa del gobierno fracasa ante la negativa del acusado, quien funda su rechazo en el privilegio de inamovilidad que la Constitución de 1980 concede a los comandantes en jefe. Esa severidad gubernamental se expresa también, más adelante, en el veto presidencial al ascenso a general de un ayudante de Pinochet, sobre el que recaen acusaciones de violación a los derechos humanos. En la misma línea, el gobierno de Frei hará al Estado parte de los procesos por la muerte de Carlos Prats, ante tribunales argentinos, y, a petición expresa de la CUT, en la causa por el homicidio de Tucapel Jiménez. Este caso es tramitado sin efectividad durante mucho tiempo, pero culminará, años más tarde, con la condena de los culpables, casi todos miembros del servicio de inteligencia del Ejército.

Uno de los hechos más dramáticos durante el período, ocurre en mayo de 1994, cuando el juez Adolfo Bañados condena al general retirado Manuel Contreras, alias “El Mamo”, y al coronel en servicio activo Pedro Espinoza a penas de prisión en el proceso por el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffit. La condena a Contreras suscita movimientos de miembros de las FFAA en retiro y en servicio y nuevas tensiones judiciales, como relatan Loveman y Lira:

“Las tensiones cívico-militares exacerbadas por el juicio contra Contreras y Espinoza extremaron la inquietud de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, los tribunales emitían fallos contradictorios sobre la aplicación de la amnistía de 1978 (con o sin más investigación; sobreseimiento temporal o definitivo). La derecha y los militares seguían insistiendo que la aplicación de la ley de amnistía implicaba un punto final sin más trámite a los procesos judiciales existentes sobre violaciones de derechos humanos.

Pero en la carta que Aylwin había enviado a los tribunales después de hacer público el Informe Rettig, había señalado a los jueces que era preciso investigar en los casos de detenidos-desaparecidos antes de aplicar la amnistía, lo que dejaba abierta la caja de Pandora, amenazando periódicamente con la revelación de los horrores y atrocidades cometidas por agentes del gobierno militar”.

Camilo Escalona testimonia lo confuso e inesperado de esos días:

“el Ministro de Defensa de entonces, llegó a decir al diputado Sergio Aguiló, como parte de una delegación de la Comisión Política del PS, nombrada especialmente para analizar y tratar la gravedad de la situación con el Ministro del área respectiva, que los socialistas estaban “locos” si pensaban que Manuel Contreras iba a ir a la cárcel, que los militares sencillamente no lo permitirían”.

Efectivamente, Contreras resistió cuanto pudo su ida a prisión, pero finalmente en octubre de 1995, ante la decisión del gobierno de dar cumplimiento a las sentencias judiciales, debe someterse e ingresa al penal de Punta Peuco, especialmente construido para condenados con ciertos fueros. En el intertanto una petición de indulto que generales plantean al Ministro de Defensa ha sido rechazada por el gobierno.

La línea que propugna la “superación” del tema DDHH y la reconciliación nacional marca la conducta gubernativa. Se trata de un insistente llamado a la “reconciliación”, más reiterado y sistemático que en el gobierno anterior, con fuerte y explícito apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica. Ésta, luego del largo y difícil período en que se bate a favor de los perseguidos y en defensa de las víctimas, asume progresivamente la postura de demandar el perdón y de reencuentro de los chilenos, aún con costos para la consecución de la justicia. La constante convocatoria del presidente a la “reconciliación” genera tensión en la izquierda concertacionista y la crítica áspera de la izquierda opositora, por las concesiones que significa o puede significar para la demanda de “verdad y justicia”.

En los días transcurridos entre la condena de Contreras y su ingreso a la cárcel el presidente, “por razones de Estado”, y con el fin de aplacar el malestar castrense, asume la responsabilidad del cierre definitivo del caso de los “pinocheques”, ahora en manos del Consejo de Defensa del Estado. Lo hace indicando a éste que no ejerza la apelación a que tiene derecho en el juicio correspondiente. En este marco, Frei promueve una legislación que materialice su plan reconciliador y envía al Congreso proyectos que dotan al presidente de atribuciones para llamar a retiro a generales y almirantes, introducen modificaciones en el Tribunal Constitucional y en el Consejo de Seguridad Nacional, y ponen término a los senadores “designados”. Días más tarde, presenta un texto destinado a ubicar a los desaparecidos y a avanzar en los procesos sobre DDHH. Se trata de un conjunto de iniciativas que buscan “poner fin a la transición”.

El intento fracasa, por la oposición de la derecha a reformas democratizadoras y por el desacuerdo de parlamentarios de la Concertación y de las organizaciones de DDHH con el proyecto presidencial. No obstante, el proyecto es promovido una y otra vez, de una u otra forma, por sectores de derecha y del gobierno que, en el Congreso, logran un acuerdo básico conocido como “Figueroa-Otero” por el nombre de sus impulsores, el Ministro del Interior de Frei y un senador de Renovación Nacional. Su semejanza a un “punto final” impulsará a la dirección del PS, luego de tensos intercambios con el gobierno, a acoger el planteamiento de las organizaciones de DDHH y rechazarlo. El abogado de estas organizaciones y presidente de la Corporación de Reparación y Reconciliación Alejandro González explica las razones del rechazo:

“Es inaceptable que se pretenda poner término a las investigaciones, a la tarea del Estado de establecer la verdad. El tiempo puede ser una razón para que el Estado clausure las investigaciones. Esto significaría reconocer que en Chile se cometieron más de mil crímenes perfectos, sin autor, en un país que tenía una tradición en cuanto a la capacidad de investigar”

El gobierno consagra así una política que lo distancia de las organizaciones de DDHH, aparte de fracasar en sus propósitos. El proyecto de reconciliación por la vía legal encontrará obstáculos infranqueables, diagnostican Loveman y Lira:

“El caso Letelier y el juicio al ex director y al ex subdirector de la DINA, Manuel Contreras y Pedro Espinoza, el “caso de los degollados”, el caso de los “pinocheques”, que parecían tener una vida autónoma, los juicios e investigaciones pendientes en los casos de los detenidos desaparecidos, entre otros temas candentes, no permitirían al Presidente Frei enterrar al “pasado”. Había también bombas de tiempo que estallarían en cualquier momento: el descubrimiento del llamado “archivo del terror” en Paraguay, en 1993, que documentaba la participación de la inteligencia militar chilena en una red global de terrorismo del Estado (la llamada “Operación Cóndor”), el caso pendiente del asesinato del general Prats en Buenos Aires en 1974, un juicio al general Pinochet, que estaría abierto en España desde 1996 y la investigación sobre el asesinato en Uruguay del ex agente de la DINA Eugenio Berríos, cuyo cadáver aparecería en 1995”.

Se está iniciando un período de discusión teórica y política en la izquierda que no disminuirá en la década siguiente, particularmente en el PS. Una presentación del meollo de esa discusión, visto con ojos históricamente socialistas, corresponde a R. Ampuero, quien dos meses antes de su muerte y con ocasión del XXV Congreso del partido, sostiene que el PS está acogiendo “dócilmente” ciertas tesis imperantes en el mundo de la “globalización”, la supuesta “muerte de las ideologías” y el reinado del pensamiento “neoliberal”. Está así abandonando en vez de proyectar hacia el futuro lo más rico de sus tradiciones y derivando en un club de debates antes que en partido político:

“Por más de medio siglo el Partido Socialista ha sostenido en el escenario chileno la presencia de una poderosa corriente inspirada los valores de la justicia social y de la libertad y en los sectores oprimidos y explotados de la sociedad, generando un cuerpo de ideas y comportamientos que le conceden una fuerte identidad histórica [...] Algunos de nuestros intelectuales han acogido dócilmente la tesis de la muerte de las ideologías, a comenzar por la que sirvió de constante marco a postulaciones del socialismo chileno. Sobre esta premisa se fundamentó el llamado a construir un partido “pluralista”, de “ciudadanos”, cruzado de tendencias o fracciones, donde el pragmatismo sería la fórmula rectora de la acción, inspirada a su vez en un conjunto de “ideales” (o valores) genéricos y abstractos, sin apoyo en la vida real. Con este rumbo derivaría fatalmente en un club de debates o en un ente benéfico, a mitad de camino entre la Sociedad Fabiana y el Ejército de Salvación.”

En julio de 1996 la Unión Progresista de Fiscales de España interpone una denuncia en un juzgado de Valencia contra Pinochet y los demás integrantes de la Junta Militar por genocidio y terrorismo cometidos contra ciudadanos españoles residentes en Chile, chilenos y ciudadanos de otras nacionalidades. Dos años más tarde, un mes antes de la detención de Pinochet en Londres, un libro publicado en Chile por Paz Rojas, Víctor Espinoza, Julia Urquieta y Hernán Soto, dedicado a analizar el proceso español contra el dictador, concluye en su importancia para la lucha contra la impunidad:

“El proceso judicial español contra Pinochet y otros responsables de crímenes contra la humanidad se inscribe en un contexto nacional e internacional significativo. Parece abrirse paso a la tendencia persistente de la lucha contra la impunidad a escala mundial [...] En Chile, los tribunales muestran signos de sensibilización, mientras Pinochet, retirado de la Comandancia en jefe del Ejército, y libre del riesgo de una acusación constitucional después del fracaso de la primera gracias a las vacilaciones de los parlamentarios de la Concertación, se ajusta a su papel de senador vitalicio. Sin embargo, lo amenazan diversos procesos y el juicio en España que sirve de catalizador a la persecución de su responsabilidad criminal”.

Un año más tarde, en julio de 1997, la recientemente establecida Editorial LOM, que acoge textos críticos de izquierda, publica el libro *Chile Actual. Anatomía de un mito*, del ahora académico de la Universidad ARCIS Tomás Moulian. Se trata de un texto crítico de la transición democrática chilena, particularmente de la imposición de un modelo “neoliberal” que ha significado la transmutación del ciudadano en consumidor e impedido la profundización de la democracia. La obra provocará un impacto más allá de la izquierda, suscitará polémica y contribuirá, junto a otros factores, al debate político sobre la transición y la Concertación que marcará el año 1998. El libro debe ser reeditado varias veces. Para Moulian

“Aquí no ha habido transición sino transformismo, y esta es una sociedad que tiene un remedo de política, un simulacro de democracia, que ha sido forzada a una falsa reconciliación y vive en la complicidad del silencio”.

En diciembre de 1997 tienen lugar las terceras elecciones parlamentarias desde el reestablecimiento democrático. El PC propone a la Concertación una alianza electoral sobre la base de un acuerdo en cuatro puntos básicos referidos a DDHH, reformas políticas y políticas sociales. Pero, ante el veto DC al entendimiento con el PC, la Concertación rechaza la propuesta. En la elección se registra una alta negativa a participar, por la vía de la no inscripción en los registros electorales, de no votar o de hacerlo en blanco o intencionalmente nulo. Como recuerda el politólogo Carlos Huneeus, a pesar del éxito económico logrado la abstención es llamativa:

“A pesar del exitoso proceso de transición del autoritarismo a la democracia y el excelente desempeño económico de los dos gobiernos de la Concertación, un fantasma se ha hecho presente en la joven democracia chilena que oscurece el brillo de sus importantes logros: el malestar y el desencanto de miles de chilenos, especialmente de los jóvenes. Los indicadores no pueden ser más explícitos: sólo el 72% de los mayores de 18 años fue a las urnas en las elecciones parlamentarias de 1997 -lo que era una caída de 11 puntos en comparación a las elecciones de 1993- y de ellos, el 13.5% anuló el voto. Los excelentes resultados económicos, que se soñaría tener cualquier partido que busca ganar las elecciones, no evitaron que los candidatos de la Concertación bajaran en 750.000 votos en relación a los recibidos en 1993. En aquella oportunidad, la participación fue del 83% y sólo el 5% anuló el voto”.

La Concertación que en las parlamentarias de 1989 había obtenido 51,5% y en las de 1993 un 55,4, obtiene sólo 50,5% en 1997, pero de un universo reducido. Sigue obteniendo la mayoría absoluta, pero en realidad la idea de mayoría debe ser relativizada: la Concertación es sólo algo más de un tercio del universo potencial de votantes *** (chequear). Su votación cae de 3 millones 730 mil votos en 1993 a 2 millones 870 mil. Los votos válidamente emitidos disminuyen de 6.800.000 a 5.680.000 y el porcentaje de ciudadanos inscritos en los registros electorales es en 1997 sustancialmente *** (¿cuánto?) inferior a 1989 *** (para este año no hay cifras oficiales de inscritos, quizá sea preciso comparar con 1993), en particular en el estrato etario entre 18 y 24 años.

La DC, entre 1989 y 1997 ha bajado de 27% a 22,9% y su votación absoluta es sustancialmente menor. El PS entre 1993, primera elección parlamentaria en que ostenta su nombre y símbolos luego de superada la ilegalidad, baja de un 11,9% a un 11% y el PPD sube de 11,8% a 12,5%. El PR enfrenta un cataclismo electoral con un 3,1% de los votos. Todos sufren bajas sustanciales en el número de votos obtenidos.

El PC resiste mejor el impacto de la apatía y si bien aumenta su votación, no logra tampoco atraer a las multitudes desencantadas. Obtiene en 1993 un 5% y en 1997 un 6,9%. La coalición de izquierda que el PC constituye junto a grupos pequeños alcanza un 6,4% en 1993 y un 7,5% en 1997. En términos de números absolutos el PC y su coalición de izquierda prácticamente mantienen su votación y el partido por sí mismo logra un incremento desde 336 mil votos a 399 mil. Con todo, no alcanza a elegir ningún parlamentario debido al sistema electoral vigente. Luis Corvalán lamenta los efectos derechistas y antidemocráticos del rechazo concertacionista a la oferta del PC:

“Si el acuerdo hubiese cuajado se habría dado un importante paso en un sentido favorable a la democracia y en contra de la derecha y del pinochetismo. Lamentablemente no pudo concretarse, porque en la combinación de gobierno continuaron imponiéndose los que se guían por pequeños intereses de grupos y personas, los que caen o recaen en la enfermedad del anticomunismo y al fin de cuentas prefieren dejar las cosas como están y seguir entendiéndose con la derecha.”

Los pobres resultados parlamentarios acentúan los signos de malestar en la Concertación. Para el gobierno y los partidos van quedando atrás varios de sus objetivos iniciales de carácter programático. Maira y luego su sucesor, Roberto Pizarro, también socialista, no obtienen los recursos y el respaldo suficiente para un salto adelante en la lucha contra la pobreza que, sin embargo, continua un gradual proceso de reducción. Pizarro renuncia públicamente señalando sus discrepancias con la política social del gobierno. Arrate no logra hacer aprobar parte sustancial de su programa de reformas laborales, combatidas por las asociaciones empresariales y criticadas como insuficientes por la CUT. La movilización social aumenta progresivamente. Las reformas constitucionales enviadas varias veces al Congreso no tienen perspectivas de aprobación por la terca oposición de la derecha que se niega a modificar instituciones que la benefician.

El conflicto con la etnia mapuche en la zona sur adquiere dimensiones de gran aspereza. En agosto de 1998, precisa J. Bengoa, al forzar las “permutas de tierras” de los pehuenches de Ralco, donde se construirá una represa, e intentar el traslado de estos, el Estado de Chile pone fin al pacto existente desde hace diez años con los mapuches y se desata el conflicto. Los indígenas organizan su lucha, practican “tomas” de tierras y se defienden de la represión estimulada por las empresas forestales y eléctricas. Surge una nueva generación de líderes mapuches, jóvenes que buscan desarrollar territorios de autogestión y formas de autonomía para decidir, actuar y “salir con medidas prudentes y adecuadas del subdesarrollo en que se encuentran las comunidades”. Entonces a fines de siglo, agrega Bengoa, Chile se encuentra en un conflicto étnico de resultado incierto en el cual, de ambas partes, son probables fundamentalismos que impidan el logro de una demanda tan democrática y nacional como es la autonomía del pueblo mapuche:

“En Chile no pareciera haber una demanda más democrática que ésta. Es una propuesta transformadora de nuestra democracia decimonónica, anquilosada, encerrada en la idea abstrusa de la homogeneidad como condición de vida en común. Los mapuches le plantean al Estado un desafío formidable en este fin de siglo. Los jóvenes indígenas les están diciendo a los chilenos: vivamos en la diversidad. Vivamos en un país múltiple en términos culturales, en que cada cual pueda expresarse de manera libre, en que podamos construir nuestros sueños. La demanda de los jóvenes mapuches del fin de siglo no tiene que ver solamente con los mapuches, por primera vez en forma explícita tiene que ver con toda la sociedad chilena”

LA DISCUSIÓN SOBRE EL DESENCANTO Y LA LUCHA POR LOS DDHH.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) produce en 1998 su informe anual de desarrollo humano. El estudio arroja conclusiones sobre la sociedad chilena y su tipo de desarrollo que se agregan a las formulaciones críticas de Moulián y a los malos resultados electorales. El escenario es propicio para un gran debate al interior de la Concertación. La discusión se produce entre los sectores críticos del balance de los gobiernos concertacionistas” (los llamados “autoflagelantes”) y los que enfatizan sus logros por sobre otras consideraciones (los “autocomplacientes”). Norbert Lechner, el principal investigador y teórico del informe del PNUD, sostiene que éste muestra la existencia de un difuso “malestar social” existente en la sociedad chilena, que “pone en peligro la sustentabilidad del proceso de modernización” en cuanto impide a la gente percibirse como sujeto de ella:

“Sabemos que la modernización conlleva seguridades e inseguridades. Hoy día, los chilenos tienen la seguridad de no pasar hambre y de ser respetados en sus derechos humanos. Simultáneamente, expresan sentimientos de inseguridad e incertidumbre. Sus experiencias remiten a razones objetivas y subjetivas. Los antecedentes empíricos permiten distinguir tres ámbitos: ■ el miedo a la exclusión [...] la gente no está segura de que los sistemas de salud y de previsión le brinden una protección adecuada [...] Tales experiencias son potenciadas por las dinámicas de una economía capitalista de mercado cuyos criterios de flexibilidad y competencia trastocan las pautas establecidas [...] ■ el miedo al otro: el temor al delincuente, muy superior a las tasas reales de criminalidad [...] La aguda percepción del extraño como un potencial agresor refleja la debilidad del “nosotros”. Las identidades colectivas han perdido su anclaje material y simbólico; su lugar es ocupado por una retracción al hogar y un “individualismo negativo” [...] ■ el miedo al sinsentido [...] la vida social como un proceso caótico [...] La falta de horizonte temporal de duración dificulta desarrollar un “sentido del orden” [...] En síntesis, la gente percibe que ella ni es el sujeto de una modernización que parece avanzar a sus espaldas ni el beneficiario de las nuevas oportunidades”

José Joaquín Brunner, entonces Ministro Secretario General de Gobierno, ve en esta discusión una objetable crítica global al modelo de desarrollo aplicado. La abstención electoral ha favorecido en la Concertación, dice, un “*shock del malestar*”, cuyas causas estarían 1) en “*un modelo de desarrollo que multiplica las desigualdades*”; 2) una política neoliberal que “*mercantiliza los bienes públicos esenciales*”; 3) una frustración con la democracia, producto de “*los límites de la transición*” y 4) “*una cultura de la modernidad que fomenta el individualismo, la desconfianza, el consumismo*”. Brunner difiere de este diagnóstico que le parece desmentido por la carencia de protesta social y el clima general de estabilidad y equilibrio que se aprecia en la sociedad chilena, así como por el crecimiento estable de la economía. Habría que indagar, insinúa, a qué tipo especial de malestar se alude cuando el “bienestar” es tan generalizado :

“Primero que todo, llama poderosamente la atención que el diagnóstico del malestar generalizado no se haga cargo, de entrada, del hecho que las señales provenientes de la sociedad sean tanto más ambiguas de lo que dicho diagnóstico admite. Así, por ejemplo, no hay signos demostrativos de ningún tipo de descontento generalizado; más bien, la sociedad chilena muestra durante los últimos ocho años, bajos grados de conflictividad social, una temperatura ideológico-cultural fría o moderada, una fuerte propensión a mantener sus equilibrios básicos, un clima de dedicación casi obsesivo al trabajo y un escaso espíritu de protesta. Quizá por eso se habla de un “malestar difuso” que, coloquialmente, viene a decir que es espacioso, dilatado pero, al mismo tiempo, de contornos poco precisos y ambiguo en su presencia. También debiera llamar a reflexión el hecho de que el diagnóstico de malestar generalizado coexista con el período de mayor crecimiento del país en casi todos los ámbitos y con un mejoramiento --ciertamente desigual pero también generalizado-- en las condiciones de vida de la gente. Luego, los malestares que existan tendrían en cualquier caso que ser de un tipo especial, pues no obedecen al estancamiento, a la recesión, a la crisis, al elevado desempleo, a la contracción de oportunidades, al deterioro en las condiciones de vida, a un empeoramiento sostenido de la economía, la sociedad o la cultura”.

Eugenio Tironi coincide con Brunner en caracterizar lo que parece la paradoja de la modernización del país: genera un malestar que políticamente está más en la Concertación gobernante que en la derecha opositora. Tras el informe de desarrollo humano del PNUD, sostiene, hay una “*sofisticada teorización*” destinada a demostrar la insatisfacción de la militancia concertacionista con el curso de las cosas. Militancia que, insinúa Tironi, objeta el rumbo modernizador del país:

“El descontento es el sentimiento que nutren las oposiciones para legitimarse como alternativas, no las fuerzas de gobierno. Paradojalmente en este caso, la oposición oficial (la derecha) se siente mucho más cómoda y confiada con la marcha y la gestión del país que la mayoría de la dirigencia concertacionista. Es un hecho que la mayor insatisfacción con respecto a la marcha que sigue el país no proviene de la gente en general, sino de la militancia y dirigencia de los partidos de la Concertación. Este sentimiento se viene acumulando seguramente desde 1990, pero es recién ahora que ha estallado sin control. Dos hechos han sido ilustrativos. El primero fue la acusación constitucional contra Pinochet, que dio pie para que se expresara la profunda frustración de la Concertación con respecto a lo que parecía su obra más preciada: la transición política y la recuperación de la democracia. El segundo es el surgimiento en su seno, después de los mediocres resultados de la elección parlamentaria de diciembre pasado, de una suerte de doctrina del malestar; esto es, una sofisticada teorización avalada recientemente por un estudio de un organismo de Naciones Unidas--destinada a mostrar que los chilenos son profundamente infelices, ya no tanto porque no logran incorporarse a la modernización, sino precisamente por lo opuesto: se han incorporado, pero descubren que ésta les estresa demasiado provocándoles diversos trastornos de tipo emocional.”

En cambio, para el DC Carlos Huneeus “*el malestar*” de los ciudadanos, tan discutido, es real y exige una política que interese efectivamente a estos, que asuma las diferencias “*entre los partidos de derecha y la Concertación*” y se despoje de sus aspectos “*tecnocráticos*”. Otro intelectual del mismo partido, Sergio Micco, manifiesta su discrepancia con Brunner y Tironi al discutir con ironía el calificativo de “*autoflagelante*” endilgado a los concertacionistas críticos. Imagina al efecto una consulta al también imaginario y “*renombrado psicoanalista José J. Brunner*” quien, luego de escucharle sobre sus síntomas logra curarlo y transformarlo en un “*autocomplaciente*”:

“Entonces comprendí que el Dr. Brunner me había curado. Que todo hombre y mujer moderno es autocomplaciente cuando ve la obra del esfuerzo humano, como la democracia y la comunidad de los iguales. Y llora cuando observa lo que le falta por hacer para realizar esa pequeña utopía, la de todos los días, la que sueña con que nadie vaya a dormir con el estómago vacío. Nada más. Nada menos. Silbando una confusa melodía entre Brilla el sol, El pueblo unido y En el nombre del Señor de U2, alegremente partí a combatir contra los molinos de viento. ¡Gracias Dr. Brunner!”

El responsable principal del informe del PNUD, el DC Eugenio Ortega, en la perspectiva más clásica del progresismo de su partido, impugna las posturas de Brunner como un “*realismo*” sin perspectivas, por efecto del cual el modelo de civilización que la Concertación aplica termina en un escepticismo sometido a las “*condiciones reales que limitan su horizonte de posibilidades*”:

“Según algunos, (se responde Brunner); sería posible optar por un modelo alternativo de civilización y crear una sociedad fraterna, ecológicamente sustentable, plena de sentido comunitario y valores altruistas. Lo más probable, sin embargo, es que tal salida no sea factible, pues los pueblos no eligen su historia sino que deben hacerla en la adversidad, confrontando condiciones reales que limitan su horizonte de posibilidades. Es probable, continúa Brunner, que estemos destinados a vivir el malestar de la modernidad si queremos conquistar en las circunstancias que nos toca vivir, la oportunidad de transformarnos en un sociedad desarrollada. Tal es la paradoja inscrita en el corazón de la modernidad. Como Fausto, concluye Brunner, el riesgo es perder el alma por un incierto instante de plenitud” Desde mi punto de vista, sólo la perspectiva de un “realismo utópico” nos da el horizonte

para no caer en el escepticismo. Así podremos relacionar los valores y objetivos deseados con las limitaciones que debemos franquear”.

De este modo se cursa dentro de la Concertación y de la izquierda concertacionista una discusión de gran envergadura. Las dos posturas que cruzan transversalmente a los partidos, con particular eco en el PS, suscitarán en los años siguientes debates aún mayores entre “autocomplacientes” y “autoflagelantes”. Eugenio Lahera y Cristián Toloza, asesores del presidente Frei, definen la postura más conformista como un “realismo” que garantiza el crecimiento económico y la modernización, a la vez que crea condiciones para evitar la regresión autoritaria siempre amenazante. Los logros de Aylwin en materia de inflación, crecimiento, equilibrio fiscal, pobreza, competitividad y DDHH, “dieron estabilidad política y económica a la naciente democracia”. Al gobierno de Frei corresponde dar continuidad a esos logros y avanzar en “la modernización e integración nacional” del país:

“Para quienes la sostienen, la actual administración ha enfrentado acertadamente temas claves de la transición. Hizo posible que, en el caso del general Contreras, se hiciese efectivo el fallo de la justicia, concluyendo un período de incertidumbre nacional con su final encarcelamiento. A propósito del retiro de los antiguos Comandantes en Jefe, incluido el general Pinochet, retiro previsto en la Constitución, se crearon las condiciones para que asumieran comandantes alejados del liderazgo político del gobierno militar, iniciando de este modo un nuevo ciclo en las Fuerzas Armadas”.

A su vez, las voces críticas enfatizan las carencias en materia de igualdad social y de democratización institucional y política. Percibe, dicen Lahera y Toloza, déficits en salud, “en políticas relativas a género, jóvenes, adultos mayores, pueblos indígenas y familia”. Critican la desprotección de los trabajadores, la regresiva redistribución del ingreso, la debilidad de las políticas públicas frente a la “dinámica del mercado” y el fracaso de la reforma constitucional, concluyendo en que la política de consensos está agotada:

“En definitiva, se considera que la transición ha consistido en un traspaso de gobierno pero no de las facultades de un régimen democrático, con el resultado de que su ejercicio se ve empequeñecido, y se menoscaba su prestigio y dignidad. A esta perspectiva se suma [...] la opinión de que no existen razones para esperar cambios desde dentro del sistema [...] No existiendo más posibilidades de cambio, se ha agotado la estrategia de los consensos y, por ende, ha llegado la hora de la movilización social y política.”

A lo anterior es preciso agregar el severo deterioro de la presencia “concertacionista” en el mundo de las comunicaciones. El fenómeno tuvo su primera señal de alarma a fines de 1991, a propósito de los síntomas de fracaso del proyecto periodístico del diario “La Época”. Seis años después ninguno de los medios escritos que apoyan a la Concertación existe y la insatisfacción de ésta respecto de su política comunicacional es generalizada. Como recuerda el periodista Ascanio Cavallo:

“Las murmuraciones subían de tono: el libre mercado estaba sepultando el pluralismo, los medios que se jugaron por impulsar la democracia, languidecían. El diario “Fortín Mapocho” cayó casi sin pena ni gloria con vagas promesas incumplidas. Las revistas que fueron el gran bastión antiautoritario (Análisis, Apsi, Hoy), vivían al borde del derrumbe financiero. Cauce, después de una corta y brillante carrera, había desaparecido en 1989, y Página Abierta, surgida en ese mismo año, y que renovó las temáticas de la oposición, se encontraba también en graves apuros. En cuanto al Canal Nacional, no convenía a muchos su pretendida asepsia”.

Para Enrique Correa la discusión concertacionista no se explica suficientemente por la oposición entre “realismo económico” y “cambio social”, como, a veces, es la imagen del debate. Su tesis es que en realidad tras ese “realismo” hay un necesario cambio en profundidad del pensamiento de izquierda, que reconoce hoy su común origen con el

liberalismo, la intermediación del mercado como indispensable para el crecimiento y a éste como la primera prioridad de cualquier política de desarrollo:

“Eliminada la larguísima discusión, que no involucró al socialismo europeo sino al comunismo, en relación con el tema de la democracia y generalizándose en el mundo las políticas de mercado, incluso en el comunismo, como lo demuestran los procesos chino y vietnamita, hay una cercanía mayor entre el liberalismo y el socialismo [...] Afirmando que una de las grandes virtudes de la Concertación es que supo combinar o ha buscado combinar su propósito permanente por una sociedad más equitativa, que finalmente es el rasgo distintivo de la centroizquierda, [...] con políticas económicas estrictamente de libre mercado. De hecho se ha producido, en la práctica, a lo mejor no en las ideas, pero en la práctica se ha generado una aproximación entre el centroizquierda y el mercado muy importante [...] la Concertación que ha dejado de demonizar al mercado y lo entiende ya no como un mal necesario sino como un instrumento indispensable para que nuestras economías crezcan y considera, por otra parte, que la creación de riqueza es la que precisamente permite y da viabilidad a las políticas de equidad, para que estas no se transformen en sueños siempre imposibles”

Así puestos los puntos sobre las ideas por Correa sobre el giro “liberal” en el pensamiento histórico de la izquierda chilena, desde la izquierda opositora las críticas son enfáticas. Proviene tanto de sectores reducidos que plantean posiciones revolucionarias violentas como de las fuerzas más consistentes que se reconocen en la órbita política del PC. Pero, por su parte, el debate concertacionista no ignora la expresión de Moulián en 1997: *“el Chile Actual, páramo del ciudadano, paraíso del consumidor”*. No son pocas las críticas de intelectuales de la Concertación al “liberalismo progresista” que parece estar resurgiendo en el Chile de fines del siglo XX. Antonio Cortés, uno de sus más difundidos autores, sospechará que el debate intelectual en curso puede resultar inútil en cuanto su objetivo, como el de otros del pasado, parece ser legitimar *“decisiones políticas ya adoptadas”* antes que aportar ideas y teorías renovadas a las decisiones políticas. Además de esta carencia de ideas y teoría, objetará a los nuevos “liberales” su pretensión de “pensamiento único” y la consiguiente renuncia a la crítica del capitalismo y de la derecha conservadora:

“tienden a hacerse los lesos respecto de los lados oscuros del capitalismo y de la modernidad. Virtualmente han renunciado a la crítica, al reconocimiento de las contradicciones y los límites obvios que entrañan ambos momentos. En sus exposiciones predomina el acriticismo, la exaltación, casi hasta el panegírico, sólo de sus virtudes [...] Los liberales progresistas chilenos serían intelectualmente más respetables y políticamente más aceptables si dejaran de entretenerse con los pretéritos y se abocaran a enfrentar el verdadero antiliberalismo del presente y del futuro, a saber, el neoconservadurismo de derecha”

La amplia discusión intelectual entre quienes están por mantener el rumbo y quienes por acelerar reformas “progresistas” trascenderá el debate teórico y alcanzará transversalmente a los políticos y partidos de la Concertación, con la especial participación de sus sectores “izquierdistas” provenientes del PS y el PPD y de los nuevos DC progresistas.

En su nivel propiamente político, este debate se desata a mediados de 1998 a propósito de un manifiesto de funcionarios de gobierno y dirigentes políticos “concertacionistas” emitido bajo el título “Renovar la Concertación. La Fuerza de Nuestras Ideas”. Allí se retoma lo esencial del argumento “autocomplaciente”. *** Firmado, entre otros, por ministros como Soledad Alvear, José Miguel Insulza y José Joaquín Brunner, parlamentarios como V. Barrueto, M. A. Saa y José Antonio Viera Gallo, empresarios como Oscar G. Garretón y Máximo Pacheco M. E intelectuales como E. Tironi y Antonio Cortés Terzi, el Manifiesto pone el énfasis esencial de sus tesis en los logros de los gobiernos concertacionistas, critica a los “críticos” por incapaces de representar políticamente la realidad del país y sostiene que *“los problemas del Chile de hoy son los propios de una sociedad en fuerte proceso desarrollo”* y que, por

consiguiente, “*corresponde sostener con firmeza su actual modelo de desarrollo*”. Es indispensable para asegurar el crecimiento económico, agregan, un Estado activo “*pero limitado*”, moderno, descentralizado y “*focalizado en sus tareas esenciales*”. En conclusión “*la Concertación debe renovarse para ofrecer un liderazgo a la altura del siglo XXI*” y de una sociedad “*que se ha vuelto mucho más autónoma y dinámica*” que la de diez años atrás:

“Lo que Chile necesita es mantener un desarrollo acelerado pero más humano, con mayor sentido de cohesión social y más énfasis en los contenidos comunitarios y democráticos de nuestra convivencia. Un desarrollo en que la vida cultural de la Nación se vea enriquecida por la libre manifestación de la creatividad de la gente, de sus intelectuales, científicos y artistas,; donde la participación se exprese a través de nuevos canales y asociaciones y donde se mejoren los equilibrios en las relaciones sociales, de poder, de riqueza y de conocimientos. En suma, una sociedad coherente con sus propios valores, libre y solidaria”

La respuesta inmediata proviene de un grupo, también transversal a los partidos de la Concertación, para los cuales el Manifiesto “*simplifica las nuevas realidades sociales*” es “*exitista*”, equivoca el diagnóstico y, sobre todo, es “*insuficiente en la definición de las tareas futuras*”. Tras la valoración de la “*obra maciza realizada por los dos gobiernos*” de coalición, pretende descalificar la búsqueda de un balance maduro que “*junto con celebrar los logros, reconozca las carencias y asuma los nuevos desafíos*”. La proclama tiene el título “*La Gente tiene Razón. Reflexiones sobre las responsabilidades de la Concertación en los tiempos presentes*” *** y entre sus firmantes están parlamentarios como J. Gazmuri, Carlos Montes, Juan P. Letelier, Isabel Allende, Juan Bustos, Jaime Estévez, Carlos Ominami y Ricardo Núñez, dirigentes sindicales como Raúl De la Puente, y académicos e intelectuales como M. A. Garretón, Gonzalo Martner, Sergio Micco, J.E. Vega y Faride Zerán. El país, sostiene, no requiere cualquier modernización sino una “*abierto, reflexiva y crítica*”, que permita “*construir colectivamente su sentido*” y se refleje en la cultura y las mentalidades, enfrentando al “*integrismo conservador*” que sólo la concibe en el plano de la economía. La sociedad chilena no será moderna mientras no supere las “*fuertes desigualdades, privilegios y discriminaciones*” que la caracterizan ni será cabalmente democrática mientras no estimule la participación de la sociedad civil y resuelva el bloqueo institucional autoritario impuesto por la constitución pinochetista:

“No es aceptable la idea que la gente “vota” en el mercado, o participa a través de la sola información individual o de puras manifestaciones privadas. Ella sólo tiene sentido si, al mismo tiempo, existen los espacios colectivos y públicos para agregar demandas y hacerlas traducibles a su procesamiento político. El Estado fue determinante en la historia de nuestro país en la conformación y el fortalecimiento de los grupos económicos privados. Sería incomprensible que hoy, con la justificación ética que no existió en el caso anterior, no mostrara similar o mayor decisión para apoyar y fortalecer sus indispensables contrapesos en la sociedad civil [...] Es falso que exista un dilema, entre sostener el alto ritmo de crecimiento económico y avanzar hacia niveles superiores de equidad. Por el contrario estos últimos son una condición necesaria de la estabilidad política, el desarrollo económico y la paz social [...] No son presuntas ni “ortodoxias” ni “desviaciones” respecto a un particular “modelo económico” las que definen el eje principal de la Concertación hacia los años próximos: son las decisiones que debemos tomar para avanzar hacia una sociedad más democrática, menos desigual, más segura, más transparente y confiable [...] Asumir los desafíos del momento es la tarea a la que llamamos a la Concertación. Orgullosos de nuestro pasado, leales con nuestro presente, alegres por el futuro al que marchamos”

Con acentos también críticos al Manifiesto se expresará otro conjunto transversal de opiniones que reúne a dirigentes de las tendencias más izquierdistas de la Concertación, básicamente del PS y de la DC, y que es también firmado por artistas y gente de la cultura. Su propuesta lleva el título de “*La Gente quiere Cambios. Un debate necesario*” *** y la

suscriben, entre otros, Nissim Sharim, Tennyson Ferrada, María Maluenda, Horacio Salinas, Jorge Coulon, Bernardo Subercaseaux, Jorge Montealegre, Ismael Llona, Roberto Pizarro, Mireya García, Jorge Lavanderos, Sergio Aguiló, Camilo Escalona, Guido Girardi y Fanny Pollarolo. La idea central es que el Manifiesto expresa un “*conservadurismo transversal*” cuya pretensión es hacer creer que “*la realidad no ofrece más posibilidades*” que las actuales, mientras sus sostenedores “*ofrecen administrar el orden*” de tal modo que “*cuesta precisar su diferencia teórica con la oposición de derechas*”. La alianza de la izquierda, la centroizquierda y el progresismo, enfatizan, nació para “*cambiar el sistema autoritario y neoliberal y la cultura conservadora heredada*” y, hoy como ayer, el desafío sigue siendo “*ser progresistas y no conservadores*”. Es cierto que se requiere una ética de la responsabilidad, pero también una “*de principios*”. El grupo además se deslinda de la izquierda no concertacionista, objetándole una visión “*testimonial*” que no se hace responsable de los efectos de sus acciones:

“Avanzamos en el crecimiento del producto y el control de la inflación [...] Sin embargo persiste una importante brecha entre ricos y pobres, entre La Dehesa y La Pintana, lo que nos convierte en una sociedad estructuralmente dividida. Nuestra aspiración de crecer con equidad sigue siendo una tarea incumplida [...] En la queja de la ciudadanía se manifiesta también la frustración de que no hayamos removido aún los enclaves autoritarios. La gente reprocha que su capacidad de influir en las decisiones políticas sea prácticamente inexistente. Que su voto “no valga” ni su opinión sea tomada en cuenta [...] Rechazamos que se pretenda hacer incompatibles la ética de los principios con la ética de la gobernabilidad y de la responsabilidad. Responsabilidad y principios son indivisibles en una sociedad democrática. De la misma manera, responsabilidad y testimonio son inseparables: el testimonio debe ser responsable.”

En los tiempos de semejante debate intelectual y político las relaciones civil-militares parecían encaminarse por un curso de mayor estabilidad luego de haber sorteado las dificultades suscitadas por el caso del Director General de Carabineros, el veto presidencial a los ascensos a oficiales sospechados de violaciones a los DDHH y la paralización de la causa contra el hijo del ex dictador. No obstante, el movimiento de DDHH, en particular organizaciones de familiares y abogados, continúan bregando para que los tribunales clarifiquen el destino de los desaparecidos y sancionen a los responsables. En ese marco, Gladys Marín, a nombre del PC, presenta en enero de 1998, ante la incredulidad colectiva, la primera querrela contra el ex dictador, patrocinada por el abogado Eduardo Contreras Mella.

De acuerdo a las normas constitucionales vigentes, Pinochet deja la comandancia en jefe del ejército en marzo y jura al día siguiente como senador vitalicio, en medio de incidentes provocados por parlamentarios socialistas, del PPD y radicales. Pocos días más tarde un grupo de parlamentarios DC, contra la opinión de su partido y del gobierno, presenta una acusación constitucional contra él dando inicio a un juicio político en el Congreso. La acusación es rechazada al contar en la Cámara sólo con los votos de la izquierda de la Concertación y de los diputados DC acusadores. Las querellas contra el ex dictador se multiplican, siguiendo el ejemplo de la primera, y el juez Juan Guzmán Tapia comienza a conocer de ellas.

Sin embargo, el episodio más inesperado y perturbador para la Concertación, la derecha y las FFAA, está aún por ocurrir. En octubre de 1998 Pinochet es detenido en Londres, donde ha viajado supuestamente invitado por una industria de armamentos. Se trata de una petición del juez español Baltasar Garzón, dictada en la causa por violaciones a los derechos humanos abierta en Valencia en 1996. El nombre de Garzón, que fuera asesor del presidente Allende, ha dicho Teitelboim, “*deberá figurar en los textos que traten el vuelco espectacular*” que entonces surge en la situación de los DDHH:

“Abrió un capítulo nuevo en el tratamiento de los Derechos Humanos [...] Puso sobre el tapete la vigencia del castigo en cualquier país por delitos de lesa humanidad al más redomado tirano y a sus cómplices más siniestros. En lo sucedido ha jugado un papel primordial el abogado Joan Garcés. Recomendado por Francois Mitterand, fue asesor político del Presidente Salvador Allende. Vivió en La Moneda el desenlace del once de septiembre. Aquella mañana el Presidente en su último día de vida le pidió salir para contar al mundo lo acontecido. Nunca olvidó el encargo.”

La detención de Pinochet, según Loveman y Lira, deja en evidencia que Chile no es un país reconciliado:

“Durante 17 meses el “caso Pinochet” complicó las relaciones internacionales, las relaciones bilaterales de Chile con Inglaterra y España, y la comunidad internacional, respecto a los convenios de derechos humanos, crímenes de guerra, y crímenes contra la humanidad. Dentro del país el “caso Pinochet” provocó reacciones profundamente encontradas, dándoles un mentís a quien se le ocurriera imaginar que Chile era un país reconciliado con su pasado o unido por el deseo de “seguir adelante”. A ello se agregó la activación, en los Tribunales de Justicia, de varios casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, el caso conocido como Caravana de la Muerte, el del asesinato del general Carlos Prats y su esposa, el de Tucapel Jiménez, entre otros, lo que tensionaría cada vez más las relaciones gobierno-Fuerzas Armadas.”

La izquierda no concertacionista adopta de inmediato una postura contraria a la defensa o liberación del dictador, que ocupa a la sazón el cargo de senador vitalicio. Las organizaciones de DDHH adquieren gran protagonismo, encabezadas por Sola Sierra, y las de chilenos en el exterior y el movimiento internacional de solidaridad con la democracia chilena, que tanta importancia tuviera durante la dictadura, cobran nueva vitalidad.

La izquierda concertacionista debe enfrentar un momento crítico. Fundándose en la necesidad de consolidar la nueva relación entre FFAA y democracia y de avanzar en la reconciliación, el presidente argumenta “razones de Estado” y decide asumir aquellos argumentos de derecho internacional que pudieran favorecer al ex dictador y hacerlos valer según corresponda. En esta política gubernamental cumple un rol destacado el ministro socialista de Relaciones Exteriores José Miguel Insulza.

La situación política es compleja. Por una parte, las primarias presidenciales están ya a la vista. La DC ha levantado la candidatura del senador Andrés Zaldívar y la izquierda de la Concertación la de Ricardo Lagos con el apoyo del PS, el PPD y el PR. Además, las primarias se harán con un padrón abierto, sin límites de inscripción como en 1994. Se prevé una gran opción para Lagos. Ante la coyuntura la DC, salvo sus sectores de izquierda, comienza a exigir públicamente a los socialistas una “conducta de Estado” en el tema de la detención del dictador. El socialismo está estremecido, entre la necesidad de acompañar al gobierno y garantizar la continuidad de la Concertación y el sentimiento y apreciación de sus bases y de la mayoría de sus dirigentes. Lo ha expresado Camilo Escalona, en aquel momento vicepresidente del PS, que entiende la posición oficial como un retroceso democrático inaceptable frente a las presiones militaristas:

“La defensa de Pinochet por quien debiese defender el interés común de la nación, es decir el gobierno, me ha impactado profundamente. Me ha dado pena y dolor por los que cayeron y me ha dado vergüenza por mi país. Resuenan en mí las sombrías predicciones de años atrás, cuando no se iniciaba aún la transición. Entonces parecía lejano el día en que Chile se liberaría definitivamente de las tenazas, de esa mixtura de autoritarismo de corte fascista, constituida por el mesianismo neoliberal y la tutela castrense, que tantos quebrantos ha provocado en Chile. Estas circunstancias me han producido una inevitable sensación de retroceso y un inocultable temor, ante el peligro de que se instale el hábito de no saber qué hacer, salvo ceder, frente a las dificultades y presiones antidemocráticas del militarismo con o sin uniforme”.

A través de los medios de prensa de la derecha se inicia una campaña antisocialista de magnitud desconocida a fin de calificar de antichilena la posición de cautela y desconfianza frente a la postura gubernativa que adopta parte importante del PS. Se comienza a agitar la posibilidad de un “gobierno nacional” y de alejar del gobierno a los sectores “antipatriotas”, léase socialistas, en una clara maniobra para frustrar la candidatura Lagos. La mayoría de las bases del PS estima que el gobierno no debe intervenir o, al menos, debe restringirse al terreno jurídico, como está obligado, y abstenerse de entrar al terreno político de las relaciones de Estado a Estado. Las posiciones de la izquierda de dentro y fuera de la Concertación se diferencian en el juicio sobre la línea de gobierno, pero en el debate tienden a reencontrarse en el seno de las organizaciones de DDHH, en las organizaciones de base y en el activismo de parlamentarios socialistas. Un grupo de ellos visita Londres para allegar antecedentes contra el dictador, entre ellos Isabel Allende, Juan Pablo Letelier, Fanny Pollarolo y el abogado penalista que había logrado sentencia condenatoria para los culpables del asesinato de Orlando Letelier, Juan Bustos. No obstante, desde la izquierda más crítica, Tomás Moulian fustiga a los socialistas por lo que ve como una estrategia “de reconciliación” que renuncia al cambio:

“¿Qué explica ese comportamiento del gobierno chileno? Creo que sólo en parte se explica por el temor. Lo más importante es que el episodio Pinochet ha permitido la puesta en escena de un gran acto de reconciliación, en el cual una parte de los socialistas ha actuado con plena conciencia de sus intereses estratégicos. En efecto, para los intereses de largo plazo de este socialismo chileno, que algunos sectores nostálgicos de su interior aún desconocen, es un gran gesto apoyar a Pinochet y con eso liquidar el pasado. Eso es así porque están con el presente, están con este Chile.”

Otra voz crítica, desde el PPD, es el dirigente Jorge Schaulsohn para quien la Cancillería cometió el error que dio origen al conflicto: haberle entregado al dictador una representación diplomática:

“creo que todo lo ocurrido le ha producido un enorme daño a Chile. En Europa somos vistos con incredulidad, la gente no entiende que Chile esté defendiendo, como lo hace, a Pinochet. Uno tampoco puede pretender que lo entiendan y mucha gente en Chile tampoco lo entiende. No me explico por qué la Cancillería otorgó a Pinochet una misión diplomática, cómo no fueron capaces de prever lo que pasó. Se critica mucho a los asesores de Pinochet, pero es la Cancillería la que debió negar la misión diplomática y decirle a Pinochet que aun con ello era probable que lo detuvieran. Ahora eso aparece como un punto menor, pero Pinochet era embajador en misión especial del Gobierno de la Concertación.”

Dirigido durante el período alternativamente por Camilo Escalona y Ricardo Núñez, acompañados de otros dirigentes como Edgardo Condeza, Gonzalo Martner, Isabel Allende, Fanny Pollarolo, Osvaldo Andrade, Francisco Fernández y Pamela Pereira, el PS se esfuerza por compatibilizar sus obligaciones de partido de gobierno con la mantención de un perfil de izquierda. Todas las fuerzas políticas de la Concertación son conmovidas por los acontecimientos de aquellos años. En la DC resurge un grupo de parlamentarios entre los que destacan Andrés Palma, Gabriel Ascencio y Tomás Jocelyn Holt, con posiciones de izquierda, protagonistas de la acusación constitucional a Pinochet, y de senadores como Jorge Lavanderos, Mariano Ruíz Esquide y José Ruíz Di Giorgio, que defienden los proyectos más progresistas en el parlamento, especialmente en materia de salud y trabajo. En el PPD surge un sector proclive a dejar de lado toda identidad socializante para asumir una identidad liberal moderna, al mismo tiempo que una corriente central promueve la idea de un partido de denuncias, que desideologice la práctica política y ponga énfasis en la defensa de los derechos del ciudadano común. En el radicalismo dos alas, una de izquierda, encabezada por su presidente Anselmo Sule y dirigentes como Patricio Tombolini, y otra más moderada, encabezada por Juan Agustín Figueroa, disputan la presidencia del partido. En definitiva la

Concertación se diferencia transversalmente en los dos cauces mencionados antes, “los autocomplacientes” y “los autoflagelantes”, alabanciosos y críticos, conformistas e inconformistas.

Los últimos tiempos del gobierno son intensos. La crisis económica surgida años antes en Asia golpea a la economía chilena, una sequía persistente genera una crisis gravísima de abastecimiento eléctrico y, la política, entre “autocomplacientes” y “autoflagelantes”, es sacudida por la crisis del arresto y prisión de Pinochet en Inglaterra.

El gobierno Frei registra, sin embargo, avances en el mejoramiento de la situación social, un despliegue emprendedor en el desarrollo de la infraestructura, una amplia inserción de Chile en los escenarios internacionales políticos y comerciales más importantes y una reforma de la Corte Suprema y el aparato judicial y, en particular, del sistema procesal penal, de vastas proyecciones

La convocatoria a las presidenciales de 1999, tensa las relaciones de la coalición y entre la izquierda en el gobierno y la izquierda en la oposición. Las primarias de mediados de 1999 despejan la principal incógnita: la DC pierde el liderazgo presidencial y debe aprestarse a apoyar, por primera vez en medio siglo, a un candidato a presidente que no es de sus filas.

Diez años de gobierno de Concertación han dejado en la izquierda un sabor ambiguo, pero ha abierto la esperanza de recuperar la Presidencia de la República para un hombre de sus filas. Para la otra izquierda, donde se sitúan comunistas e independientes de diversas proveniencias, el pronunciamiento es claramente de condena. Moulián, ya citado, junto a Armando Uribe, Alfredo Jocelyn-Holt y otros se inscriben como los críticos más acerados. María Angélica Illanes anota, en esa línea crítica, que la izquierda, “diluida” por el mercado, queda finalmente sin discurso ni proyecto:

“Al conquistarse la “democracia”, se desplazó al dictador como monumento referencial, como centro del movimiento y la protesta. Desapareció, por lo tanto, el proyecto sustentado sobre la preposición “anti”, quedándonos sin preposición o sin proposición. Emergió luego, en la plenitud de su figura, el mercado, habiendo éste conquistado tal funcionalidad, que ha sido capaz de diluir y arrastrar cualquier contento o descontento en flujo vertiginoso, enseñoreándose de la historia”.

Y concluye que ha operado una pérdida de protagonismo del movimiento popular, que ya no es sujeto autónomo de su propia historia:

“Lo social-popular no podrá estudiarse al modo moderno porque, como decíamos ---y en esto ha consistido justamente “la novedad” de este período---, lo social/popular ha perdido su protagonismo escénico y, por lo tanto, su “autonomía” como categoría histórica. En buena medida, ya no lo podremos encontrar como “sujeto”, sino como un existente tras los “objetos”: tras el televisor, tras las manzanas y papas de la feria, tras los carros de supermercados, tras las vidrieras de artículos músico-eléctricos y electro-domésticos, tras los mesones de la polla-gol, el kino y el loto”.

Algunos como el sociólogo socialista Antonio Cortés, sostienen que al perder el sujeto social popular el específico protagonismo político que tuvo en el pasado ha adquirido otro, más opaco pero no por ello menos importante. Cortés habla de “*poderes extrainstitucionales*” para destacar las capacidades de nuevos actores de determinar los asuntos públicos desde lo “privado” y desde el mercado. De las transformaciones así operadas en la sociedad chilena, su cultura y su sistema político, sostiene, no dan cuenta ya suficientemente “*las izquierdas*” ni su “*renovación*”. Han readecuado su ideología pero de modo puramente reactivo, una “*negación*” de las ideologías y proyectos del pasado que impide apreciar el funcionamiento

“sistémico” de la izquierda en el capitalismo “modernizado” de hoy y que, por consiguiente, le hace perder la posibilidad misma de la crítica:

“Dicho con toda crudeza: la izquierda y el progresismo chileno, cuyo núcleo principal se plasma en la Concertación de Partidos por la Democracia, son empíricamente sistémicos respecto del capitalismo moderno, lo han administrado y conducido para su reproducción durante una década, sin embargo, en sus lógicas expositivas se trasuntan visiones de antaño e incomodidades éticas. Fácticamente, el capitalismo “no le es ajeno”, pero cultural y comunicacionalmente esa es todavía una aceptación vergonzante, llena de pudores, actitud que deviene en óbice para la reflexión crítica y conceptualmente reconstructiva de los vínculos orgánicos entre mercado y Estado que hoy objetivamente se producen.”

El PC es un crítico persistente del gobierno, en particular de la política de DDHH y de la propuesta de “reconciliación”. El PS y el PPD enfrentan sobre el tema diferencias internas en las que, sin embargo, la mayoría apoya la línea designada como de “verdad y justicia” y se distancia de las propuestas gubernativas y los acuerdos parlamentarios con la derecha. Los dirigentes más proclives a la “reconciliación” tienen, sin embargo, más eco en los fuertes medios de comunicación controlados por la derecha y los empresarios.

Pero a mediados de 1999 la presión militar es muy grande. Los tribunales han tendido a interpretar la ley de amnistía de 1978 en el sentido de facilitar las investigaciones, con la consecuencia que los procesos no habrán de cerrarse en tanto no se determine el paradero de la persona ejecutada o desaparecida. Pinochet, por su parte, sigue preso en Londres. En ese marco, una vez más se produce una tentativa de reconciliación formal: la “Mesa de Diálogo”, una invitación a sectores representativos de la sociedad para organizar la aclaración del paradero de los detenidos- desaparecidos.

La dirigencia socialista se compromete con la iniciativa, básicamente a través de la participación en ella de la abogada de DDHH y secretaria general del PS Pamela Pereira. Junto a Pereira participan otros abogados comprometidos con el tema de los derechos humanos, como Roberto Garretón y Héctor Salazar. Por su parte, abogados de nombradía, como Carmen Hertz, Hugo Gutiérrez y otros, más próximos a las posiciones del PC se restan a la iniciativa.

Otras diferencias alejan también a socialistas y comunistas. Se trata de una derivación del empeño político-militar realizado contra la dictadura por sectores significativos de izquierda, luego retomado por grupos más pequeños. El tema de los presos por delitos cometidos en este marco, una vez reestablecidos los derechos democráticos fundamentales, después de 1990, se agrega a las tensiones de la transición. La espectacular fuga del comando comprometido con el secuestro del hijo de un magnate de la prensa durante el gobierno Aylwin, coloca al gobierno de Frei en difícil situación frente a las críticas de la derecha, por supuesta negligencia en las políticas carcelarias, y de la izquierda no concertacionista que reconoce a los presos la categoría de “presos políticos”.

No obstante las dificultades, la Mesa de Diálogo logra realizar consultas privadas que arrojan resultados que pudieran, aparentemente, conducir a resultados. Entonces se produce el regreso de Pinochet a Chile, liberado por decisión del gobierno laborista británico. Su llegada triunfal en que las altas jerarquías de las FFAA y la élite política de derecha lo reciben ostentadamente, suscita una ruptura de los débiles lazos de confianza recién construidos en la Mesa de Diálogo. El tema será, entonces, materia del próximo gobierno y el próximo siglo.

La revista jesuita “Mensaje”, en noviembre de 1999, da cuenta de la importancia para el estado de ánimo imperante el resurgimiento de la cuestión de los DDHH, que ha llevado dice enfáticamente a “*mirar la realidad con menos tapujos*”, darse cuenta que Chile es aún “*un país pobre*” y asumir con urgencia la resurgimiento de la “*cuestión mapuche*”:

“Desde que se restauró el sistema democrático en nuestro país, hace una década, el año que ha representado cambios más radicales ha sido, sin duda, este que coincide con el cambio de siglo. La fuerza con que en este año ha resurgido el permanente problema de los atropellos a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar, y el arresto del general Pinochet en Londres, nos han transformado como nación y nos han hecho mirar con menos tapujos nuestra realidad. Además, que 1999 haya sido el peor de los últimos diez años desde el punto de vista económico, con una desocupación que afecta a miles de chilenos y una mayor sensación de vulnerabilidad, nos ha permitido caer en la cuenta de que aún somos un país pobre y que debemos continuar creciendo sin olvidar nunca la solidaridad. En este tiempo hemos asistido también al despertar de las etnias que conforman nuestra nación y que habían sido sistemáticamente ignoradas. La urgencia de sus demandas nos exige buscar modalidades justas y respetuosas de convivencia con las diversas minorías, raciales y de cualquier otra índole.”

LA CANDIDATURA Y EL TRIUNFO DE RICARDO LAGOS

Como una síntesis del clima cultural y de discusiones que anuncian la campaña electoral, el intelectual socialista Juan E. Vega critica la visión de la realidad del país sugerida por E. Tironi a través de la figura virtual de un chileno de spot televisivo cuyo optimismo y éxito personal simboliza el desarrollo que trae a Chile la economía de mercado. Para Vega, como para las críticas que surgen en la Concertación entonces, Chile tiene memoria, no es el país que imagina el candidato de derecha J. Lavín, ni es irreparable la negación de la historia y la pérdida del sentido político que posibilita un futuro compartido:

“Tironi, como el personaje de la inolvidable película “By, By, Brasil”, nos promete que hará nevar en el Amazonas convirtiéndolo en “desenvolvido”. Otra posición es pura ideología, generalmente producto de intelectuales, o de una “elite” inconforme con su propia obra, abrumada hasta el hastío por sus propios CD, instalada en la nostalgia del conflicto y de una especie de paraíso de la revolución, en que había pobres de verdad [...] En su versión, estamos ante la incomprensión o rechazo de un nuevo Chile que emerge: el de los Faúndez. Estos, celular en mano, tienen por mérito principal su optimismo [...] quieren un mundo de cosas concretas, de realizaciones, donde la memoria no tiene lugar, tampoco las penas ni las dudas, al igual que Lavín [...] La imagen del futuro llegará entonces a ser consensual (amado consenso, todo lo justifica) [...] El problema, más allá de Lavín, es quedarse con una sociedad sin sentido. Sin asunción del pasado no es posible crear ni pensar el futuro”

Ricardo Lagos había sido precandidato presidencial del PS y el PPD en 1989 y en 1993. En la primera ocasión los socialistas y pepedistas reconocieron un “mejor derecho” a la Democracia Cristiana. Tres años más tarde Lagos había dejado su cargo de Ministro de Educación con dieciocho meses de anticipación al término del gobierno, para postularse en la primaria presidencial de la Concertación. La primaria, sin embargo, era sobre bases favorables a la DC y Lagos fue derrotado por amplio margen por Eduardo Frei Ruíz Tagle.

En mayo de 1998 la primaria concertacionista es abierta y permite la inscripción sin límites de los independientes que quieran hacerlo. Nuevamente Lagos deja su cargo de Ministro de Obras Públicas y alcanza ahora una aplastante victoria sobre su oponente DC Andrés Zaldívar. Cunde la impresión que muchos seguidores de la DC votaron por Lagos privilegiando una óptica más “progresista” del futuro gobierno que la que pudo ofrecerles su partido. El político y analista democristiano Genaro Arraigada, de experiencia en la

conducción del plebiscito de 1988 y campañas electorales, asume la jefatura de la campaña de Lagos.

El PC levanta esta vez una figura de sus filas como candidato presidencial: la ex diputada y líder del partido, Gladys Marín. Grupos ecologistas e independientes de izquierda apoyan la candidatura de Sara Larraín. El Partido Humanista postula a su principal dirigente, Tomás Hirsch. Un ex democristiano, de posiciones de derecha, postula como independiente, Arturo Frei Bolívar. La derecha unida levanta la candidatura del alcalde de Las Condes Joaquín Lavín.

La campaña se caracteriza por la avasalladora superioridad de medios económicos del candidato derechista. Sólo la franja televisiva disponible por ley es un escenario equiparado en el denominado “marketing” de los candidatos. La candidatura de Lagos se centra en la consigna “*crecimiento con igualdad*” y junto con valorar los logros obtenidos tras diez años de gobierno despliega una crítica fuerte al manejo ideológico que la derecha realiza de la idea de “cambio”. Finalmente, la Concertación no alcanza la mayoría absoluta de los votos emitidos y con un resultado de 49% para Lagos y 48% para el candidato de derecha, es menester convocar a una segunda vuelta electoral entre las dos primeras mayorías.

Luego de una discusión interna se reforma el comando de Lagos y se define una estrategia “menos izquierdista” para la segunda fase Soledad Alvear, Ministra de Justicia de Frei, deja su cargo para encabezar la campaña, con la expectativa de recuperar votos DC que hubieran emigrado a la derecha o se hubieran abstenido.

La memoria del poder de la derecha en el pasado y de la posibilidad de su retorno al gobierno intensifica la movilización de toda la izquierda tras la candidatura de Lagos. La votación de Sara Larraín, quien expresamente convoca a sus partidarios, y una gran parte de la de Gladys Marín confluyen a Lagos en la segunda vuelta. Incluso Andrés Pascal, ex secretario general del MIR, ante lo que considera la incapacidad de la Concertación para diferenciarse y detener el crecimiento de la derecha, llama a votar por Lagos. El Pascal de fin de siglo, partidario de una modernizada “izquierda extraparlamentaria” y de construir, dice, “*un poder popular autónomo al poder dominante*” a imagen y semejanza del de los años 70, explica su llamamiento electoral con las siguientes palabras :

“Entonces la situación que se plantea es gravísima, porque era una posibilidad real de que volviera la derecha al gobierno y con la derecha volviera una suerte de fascismo populista. Por eso llamé públicamente a votar por Lagos porque había que detener a Lavín. No me equivoco de que la derecha es el peligro más grande que tenemos”

El resultado final es favorable a Lagos. Su triunfo, obtenido días después de iniciado el nuevo siglo, abre una vez más esperanzas de avance democrático y cambio institucional y social. Las celebraciones populares conmueven al país. En el acto central en Santiago, viejos militantes socialistas y comunistas se abrazan celebrando, aliviados, la derrota de la derecha. En su discurso de esa noche de triunfo, el presidente electo saluda en la presencia de Tencha Allende el pasado cuya memoria acompaña la jornada. La multitud grita “*juicio a Pinochet*”. Días después, el nuevo presidente insinúa un balance de la política izquierdista de los noventa reflexionando sobre la experiencia que ha opuesto autoflagelantes y autocomplacientes. Elevará a la condición de principio para su gobierno el del debate entre posiciones diferentes:

“Soy autocomplaciente porque veo ¡por Dios que hemos avanzado en 10 años! Y cuando veo tanta injusticia en el país, soy autoflagelante, porque digo ¡por Dios que nos faltan hartas cosas por hacer!

Qué bueno que haya debate, tenemos que acostumbrarnos a eso. Son dos visiones, ¡bienvenido el debate! Y en mi gobierno habrá autoflagelantes y autocomplacientes y eso tiene que ver con la percepción del avance que llevamos en estos años. En Chile no tenemos debate político y eso es muy malo.”

El debate que evoca Lagos no es trivial para la izquierda. La década de los noventa ha dejado en todas las sensibilidades que se reclaman de ella un sabor mezclado, para unos, o francamente decepcionante, para otros. Luis Maira, poco antes de la elección presidencial de 1999, propone una visión balanceada entre los logros de la economía, por una parte, y el fin de la esperanza de parte de los que lucharon contra la dictadura de que haya cambios en su vida cotidiana:

“La transición chilena a la democracia ha acabado siendo así la más complicada de cuantas se realizaron en América Latina para dejar atrás los regímenes militares con ideología de Seguridad Nacional. Ha sido la más exitosa en cuanto a mantener un funcionamiento dinámico de la economía. Ha sido igualmente la que ha tenido más logros en reducir los márgenes de pobreza preexistentes. Pero, del mismo modo --y ésta es su debilidad-- ha sido la que ha tenido menor éxito en lograr un cambio de régimen político, afrontar los problemas pendientes de derechos humanos e instalar una democracia plena, lo cual ha influido decididamente en las percepciones y estado de ánimo de una parte importante de la población. Quizá si una de las grandes contradicciones de la política chilena actual, precisamente al iniciarse el proceso que debe conducir a la tercera elección democrática que decidirá sobre un nuevo presidente de la República en diciembre de 1999, es que una parte de las personas que con mayor determinación permitieron un vuelco cualitativo en la situación del país en el plebiscito de 1988, ya no esperan un mejoramiento en su vida cotidiana que sea resultado de las decisiones que se adoptan en la esfera política.”

Carlos Altamirano, por su parte, no vacila en reconocer que la transición ha dado lugar a una “democracia limitada”:

“No nos puede dejar contentos una transición que todavía está tan amarrada a la herencia de la dictadura. ¿Cómo vamos a sentirnos satisfechos con el régimen democrático que hay en Chile, cuando todavía hay senadores designados, cuando el Presidente de la República aún no puede designar a los comandantes en jefe de las FFAA; cuando este sistema electoral del bipartidismo ha sido impuesto? La mayor parte de los chilenos no nos sentimos interpretados, no nos sentimos satisfechos con esta transición ya que es una democracia limitada, con autocensura, con censura, en la cual no se debaten los problemas que nos interesan a todos”.

La dimensión “cultural” es el eje de la reflexión que formula Jorge Arrate que, más allá del éxito electoral de la izquierda concertacionista en la presidencial de 1999, estima que, sobre todo entre los jóvenes, cunde una “cultura de la indiferencia”

“no es posible hacer ni siquiera un balance global positivo en materia de la cultura política prevaleciente. Por el contrario, pareciera consolidarse una creciente indiferencia de amplios sectores por los asuntos públicos, en especial de los jóvenes. Se ha generado también un cierto desencanto, a veces traducido en una fuerte crítica, de un segmento de la población que no considera requisito para la consolidación plena de un régimen democrático la renuncia a referencias ideales que, si bien hoy parecieran no tener el esplendor de antes y requerir reformulaciones, no por eso han perdido su valor. Es más, pudieran recuperar relevancia precisamente para enfrentar el fenómeno de una política de gelatinosa superficie, que funciona cada más como mercado”.

Tomás Moulián es enfáticamente crítico de la Concertación y del rol del PS en la etapa. En tiempos en que opta por acompañar la política electoral del PC y, destacadamente, a Gladys Marín, su evaluación es que, por obra de los gobiernos de la Concertación, Chile experimenta un crecimiento de la economía sin un desarrollo social que garantice las dimensiones humanas que son inherentes a las visiones de izquierda: “*el viejo concepto de desarrollo se ha perdido, el desarrollo le exigía al crecimiento económico algo más, que hiciera una vida social más*

vivable. Hoy, tenemos alrededor de 1 millón 500 mil familias, de cerca de 3 millones 200 mil que hay en Chile, que de algún modo están integradas por la vía del sistema crediticio [...] pero lo integra sobre la base de un mayor desequilibrio, de una mayor intensificación del gasto de energía en el trabajo, y lo integra sobre la base de la desmovilización.”. En tales condiciones, Moulián ve al PS como organización “socialdemócrata”, “abocada a la administración de un capitalismo neoliberal”. Es más, el particular proceso de “renovación” que experimentó lo ha llevado a una “bancarrotada”, ya no gobierna “con un proyecto progresista” sino “de otros”. Determinada su política por un “posibilismo a toda costa” y sin proyecto propio, el PS sale del ámbito de la izquierda y deberá asumirse “sin culpas” como fuerza de “centro”. El núcleo del argumento es el siguiente:

“Se puede aceptar que un período histórico sólo permite cambios estrechos y sin embargo ser parte del gobierno, por buenas razones. Se podría incluso tolerar que un peligro de crisis económica obligara a ciertas concesiones momentáneas. Pero para no perder el rumbo en medio de las vicisitudes de corto plazo, hay que tener la brújula del proyecto, una cierta idea de Chile que el partido propone para realizar, la cual se auto-educa e intenta persuadir a la sociedad. Pero ¿cómo se hace un proyecto si se ha renunciado a tener ideología, un conjunto de proposiciones generales que permitan fundar lo que queremos, sea en afirmaciones de valor o en afirmaciones sobre el sentido de la modernidad o de la felicidad humana?”

Un énfasis sociológicamente similar al de Moulián aporta Arturo Martínez al evaluar como socialmente débil la experiencia de los primeros gobiernos de la Concertación. En general, sostiene, la política aplicada ha descansado en un permanente intento de dividir el “movimiento social”, cuya movilización, es percibida por la izquierda gobernante como potencial fuente de problemas:

“La misma CUT, que se había conformado el año 88, estuvo a punto de quebrarse entre los que querían salir a la calle presionado el gobierno de la Concertación y los otros que decían que había que ayudar a fortalecer esta democracia que era muy débil porque los milicos, los empresarios y la derecha presionaban. Es aquí donde el movimiento social vuelve a realizar un gran gesto a la Concertación política, puesto que se la juega para que la democracia se afirmara y no crearle problemas. Y otra vez este gesto no es bien entendido por la Concertación política y pasaron los cuatro años del gobierno de Patricio Aylwin y no logramos resolver adecuadamente ninguno de los temas postergados de los trabajadores. Vino el gobierno de Eduardo Frei y a esa altura el movimiento social se había debilitado mucho [...] los partidos de la Concertación cooptaron a los dirigentes sociales para que no se metieran en el campo de la movilización social”

Pero el balance de la izquierda de fin de siglo es más complejo. El senador socialista Jaime Gazmuri ve también la debilidad de la política democrática en el espacio social, pero pesa en él una memoria histórica popular que le hace tener una visión más comprensiva de los déficits de la Concertación. El no reconocimiento por las FFAA de las violaciones sistemáticas a los DDHH que cometieron en el pasado, dice, pone un alto grado de incertidumbre sobre el destino político del país. El futuro inmediato requiere una “agenda democratizadora” amplia y variada, en la cual son claves “los problemas de desarrollar ciudadanía, extender la participación, fortalecer las instituciones democráticas, descentralizar el poder y hacer cada vez más transparente su ejercicio”, a la vez que es un desafío mayor “asegurar altos niveles de crecimiento en una economía global, erradicar la pobreza y eliminar desigualdades irritantes”. Según este discurso, dos críticas merece la Concertación por no haber concretado las reformas políticas progresistas que prometió: la insuficiente prioridad dada al tema y no haber apelado “al instrumento que le dio la fuerza necesaria para derrotar políticamente al régimen de Pinochet: la movilización ciudadana y su carácter de alianza de fuerzas sociales y no sólo de partidos políticos”. Categóricamente se precisa una “memoria compartida” en el tema DDHH como base de cualquier futuro democrático para el país:

“El debate nacional sobre los “problemas pendientes” en materia de derechos humanos, y fundamentalmente el de la suerte de los detenidos desaparecidos, ha puesto una vez más en evidencia que mientras no exista un acuerdo sustantivo y mayoritario en el país sobre estos asuntos, un grado de intervención de las fuerzas armadas en asuntos considerados normalmente propios de la contingencia política será inevitable [...] [se demanda] que reconozcan que existió una política institucional que supuso una violación masiva de los derechos humanos [...] condición indispensable para garantizar que hechos de esta naturaleza no se repetirán en el futuro. O dicho de otra manera, para que las Fuerzas Armadas asuman la doctrina de que existen ciertos derechos fundamentales que deben ser respetados en cualquier circunstancia, incluso las más extremas. Lo que está finalmente en juego es construir una visión compartida de los hechos del pasado en estas materias –no la interpretación de las circunstancias que los produjeron- y lo que es más importante que lo anterior una visión común del futuro: la afirmación de que el respeto de los derechos humanos es la base sobre la que se debe edificar la convivencia civil y el orden político en Chile”

Por su parte, al intelectual socialista Antonio Cortés, más que la carencia de lazos sociales le parece criticable la incapacidad de la izquierda gobernante para ser fuerza dirigente real. Con acentos gramscianos, enfila sus dardos contra una concepción “seguidista” u “oportunista” de la política, que abdica de su rol de dirección sobre la sociedad e ignora sus responsabilidades en la formación y conformación de ésta. Política “trivializada”, incapacitada para conocer los cambios profundos que experimenta la sociedad, que llega a predominar, dice, durante la transición de los años noventa:

“Es indiscutible que la política chilena es merecedora de críticas, pero, las que más urgen e importan son, precisamente, las que se soslayan. La primera de todas es la que se ha prestado para reproducir, en complicidad con las masas, con la gente, un circuito trivializador de la vida colectiva. Los políticos han abandonado la función de ser dirigentes de la sociedad, promotores de una educación y de un sentido cívico superior. Se han rendido a - y usufructúan de la precarización cultural y social. Se han rendido puesto que no enfrentan las conductas sociales de escasa o ninguna responsabilidad cívica y que deterioran, a veces, elementales necesidades societarias o asociativas y puesto que, con frecuencia, justifican cualquier demanda grupal que, en muchos casos, son de un egoísmo corporativo extremo. Y usufructúan de ello porque la elusión de esos problemas les facilita el trabajo y les disminuye los riesgos de pérdida de popularidad. La política chilena no está operando desde diagnósticos que reconozcan de manera totalizadora y profunda el estado actual de la sociedad nacional y la intensidad dramática de los procesos de cambios que afectan tanto al conjunto como a los individuos. No existe una comprensión cabal de las transformaciones que conllevan las modernizaciones y la modernidad, particularmente en lo que se refiere a las subjetividades y a sus repercusiones en la organización y funcionamiento de lo social.

Pero la crítica directa o indirecta de la izquierda no es sólo al PS. Moulián, por ejemplo, apunta también a un PC que, incapaz de comprender los cambios de la sociedad chilena, la cultura “*posibilista*” y su impacto en la conciencia popular, ha perdido el sentido “*histórico-práctico*” que definió su política y perspectiva de alcanzar el socialismo por la “*vía institucional*”. Un PC dice que merece reconocimiento por su recta intención de construir el socialismo, aún hoy, pero que persiste en “*invitar a los trabajadores a tareas mesiánicas*” y persevera en una idea de la “*revolución*” futura que posterga logros democráticos en el presente.

Por su parte, Gladys Marín reflexiona y dice que no nos alegra “*el fracaso de la Concertación*”, pues redundaría en “*hambre y sufrimiento para los sectores populares*”, pero el gobierno “*ha sido plenamente funcional a la dominación imperial*”, ha “*profundizado la acumulación capitalista*” y preservado el “*proyecto de democracia restringida instaurado por la dictadura*”. El relato real de la transición es entonces la “*crónica de una traición pactada*”. La alianza de gobierno, simplemente, no cumplió con ninguna de las promesas de la lucha contra la dictadura:

“La Concertación proclamó que la alegría vendría con gobierno para los nuevos tiempos, que promovería el crecimiento con igualdad, en un país donde los frutos del desarrollo beneficiarían a todos los chilenos. En lugar de eso, su pensamiento económico y su práctica política fueron colonizados por las mistificaciones del dogma neoliberal, según el cual es el capital y no el trabajo el que genera valor; el trabajo es una mercancía transable como cualquier otra; el capital transnacional es un agente de desarrollo; el mercado es el único factor de asignación de recursos; el crecimiento es el único mecanismo de redistribución de la riqueza, y los equilibrios macroeconómicos son más importantes que el bienestar de las personas.”

El dirigente socialista Gonzalo Martner profundiza el análisis autocrítico y apunta a diferencias dentro de la Concertación en cuanto a la fuerza de voluntad para actuar:

“Lo que es muy grave para Chile es que el principio de mayoría no haya podido operar, estableciendo un equívoco entre la Concertación y la sociedad respecto a lo que ésta se propone hacer y sin embargo no logra hacer, lo que desmotiva, desmoviliza y a la larga confunde: empieza a no quedar claro si las cosas no se pueden hacer por falta de operatoria del principio de mayoría o por [...] falta de convicción”.

Mirando desde una óptica constructiva las diferenciaciones de la izquierda de fin de siglo, Manuel Cabieses, director de Punto Final y heredero de las tradiciones cuestionadoras que representó el MIR, ensaya un balance autocrítico que le permite mirar con optimismo el camino de la izquierda para el futuro:

“Hace unos años –que parecen más de los que realmente son- ser de Izquierda era un motivo de orgullo para los militantes y una moda para los que simpatizaban con esas ideas. Lo raro, lo “mal visto”, era defender el capitalismo y sus abusos con el hombre y la naturaleza [...] Desde diferentes perspectivas, todos queríamos alguna forma de socialismo. Ese proyecto fue tan inclusivo que hasta la Democracia Cristiana el “socialismo comunitario”. Si Radomiro Tomic con esa bandera hubiese ganado en 1970, el imperialismo norteamericano, el empresariado, la Iglesia Católica y las FFAA se habrían visto en aprietos para inventar el pretexto del golpe. Sólo nosotros -los partidarios del socialismo marxista o cristiano- éramos capaces de distinguir nuestras “profundas” diferencias. Para los otros, sencillamente éramos un solo enemigo que se enseñaba a odiar en la Escuela de las Américas. Sin embargo, no tuvimos la sagacidad de articular en un solo bloque a esa inmensa mayoría que al hablar de socialismo simplemente quería decir justicia social. Necesariamente por eso nuestro socialismo tenía que ser pluralista, participativo y democrático. Pero enfatizamos justamente lo contrario [...] Hasta el concepto mismo de Izquierda hay que despojarlo de la esperpéntica imagen que crearon el dogmatismo y el mesianismo. En Chile, donde aún está pendiente la derrota de la derecha y del militarismo parapetados en la Constitución del 80, hay que concebir la Izquierda como un movimiento social, político y cultural que respete la diversidad y coordine transversalmente múltiples identidades. Afortunadamente, me parece que ya estamos en camino.”

Cuando ese debate está en curso en la izquierda, el 11 de marzo de 2000, por segunda vez en la historia del país, un socialista asume la Presidencia de la República. Dice Ricardo Lagos:

“Un nuevo espíritu recorre nuestra Patria. El siglo XXI nos recibe con un sentimiento de unidad y con una perspectiva de renovación de nuestras mejores esperanzas. Ha llegado hoy la hora de ser un solo gran país, una sola gran nación, donde todos nuestros hijos tengan iguales posibilidades [...] Mi mandato es claro. Como lo he dicho, seré Presidente de todos los chilenos. Lo que me motiva no es el poder, sino la justicia; no la politiquería, sino la solidaridad; no las apariencias, sino la grandeza de Chile”

BIBLIOGRAFÍA

- Almeyda, Clodomiro. **Obras Escogidas 1947-1992**, Ed. Del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar y Fundación Presidente Allende (España), Santiago, 1992.
- Arrate, Jorge. “**Más allá del 2000: los próximos desafíos**”, en **Encuentro XXI**, Santiago, Otoño del Sur de 2000, Año 6, Nro. 17.
- Azócar, Oscar. “La política del PC: desde la Rebelión Popular a la actualidad”, en Loyola Manuel y Rojas Jorge (comps.): **Por un Rojo Amanecer: hacia una historia de los comunistas chilenos**. Impresora Valus, Santiago, 2000.
- Campero, Guillermo. “Organización sindical y relaciones laborales”, en Cristián Toloza y Eugenio Lahera (editores), **Chile en los Noventa**, Ed. Dolmen, Santiago, 1998.
- Cañas, Enrique. “Los partidos políticos”, en Cristián Toloza y Eugenio Lahera (editores), **Chile en los Noventa**, Ed. Dolmen, Santiago, 1998.
- Cavallo, Ascanio. **La historia oculta de la transición. Memoria de una época, 1990 – 1998**. Ed. Grijalbo, Santiago de Chile, 1999.
- Corvalán L., Luis. **De lo vivido y lo peleado**, Ed. LOM. Santiago, 1997.
- Corvalán Márquez, Luis: **Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile**. Ed. Sudamericana Chilena, Santiago de Chile, 2001.
- Cortés Terzi, Antonio. **El circuito extrainstitucional del poder**. Eds. Chile América – CESOC, Santiago de Chile, 2000.
- Cortés T. Antonio. “Liberales progresistas: mucho ruido, pocas nueces”. asuntospublicos.cl, Santiago de Chile, 2001.
- Cortés T. Antonio: “Progresismo: proyecto nacional o rendición histórica”. asuntospublicos.cl Informe 102, Santiago de Chile, 2001.
- Escalona, Camilo. **Una Transición de dos Caras, Crónica crítica y autocrítica**, Ed. LOM, Santiago, 1999.
- Fazio, Hugo. **El Programa Abandonado. Balance Económico Social del Gobierno de Aylwin**. Universidad ARCIS, Ediciones LOM, CENDA, Santiago, 1996.
- Garcés M., Milos P., Olgún M., Pinto J., Rojas M.T., Urrutia M. (comps.). **Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX**, Ed. LOM, Santiago, 2000.
- Gazmuri, Jaime. **El debate constitucional pendiente es sobre los fundamentos de la democracia**. En Perspectivas, Vol. 2, Nro. especial, Universidad de Chile, Santiago, 1999.
- Guillaudat Patrik y Mouterde Pierre. **Los movimientos sociales en Chile 1973-1993**, Ed. LOM, Santiago, 1998.
- Illanes, María Angélica. **La batalla de la memoria**, Ed. Planeta/Ariel, Santiago, 2002.
- Lechner N.: “**Desafíos de un desarrollo humano: individualización y capital social**”. Contribución al Foro Desarrollo y Cultura organizado por Science Po para Asamblea General del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Paris, Francia, 1999.
- Ljubetic Vargas, Iván. **De la historia del PC de Chile. La crisis que comenzó en los años ochenta**. Imprenta Latingráfica Ltda., Santiago, 2002.
- Loveman Brian y Lira Elizabeth. **El espejismo de la reconciliación política. Chile 1990-2002**, Ed. LOM, Santiago, 2002.
- Maira, Luis. **Chile, la transición interminable**. Ed. Grijalbo, Santiago, 1999.
- Marín, Gladys. **La vida es hoy**. Edebé-Editorial Don Bosco S.A., Santiago, 2002.
- Martner, Gonzalo. “**Una democracia plena para gobernar el mercado**”, en **Cuadernos del Avión Rojo**, número 7, Santiago, otoño 1998.
- Moulián, Tomás. **Chile Actual. Anatomía de un mito**, Ed. LOM-ARCIS Universidad, Santiago, 1997.
- Moulián, Tomás. **En la brecha. Derechos humanos, críticas y alternativas**, Ed. LOM, Santiago, 2002.
- Núñez, Ricardo. **Un compromiso por la libertad**. Ediciones Chile América-CESOC, Santiago, 2001.
- Ortega E. y Moreno Carolina (comps.): **¿La concertación desconcertada?. Reflexiones sobre su historia y su futuro**. LOM Eds., Santiago de Chile, 2002.
- Partido Socialista de Chile. **Cuadernos de El Avión Rojo**. Nro. 7, otoño de 1998, LOM Eds, Santiago de Chile, 1998.,
- Politzer, Patricia. **El Libro de Lagos**, Ediciones B, Santiago, 1999.
- Rayo Gustavo y De la Maza Gonzalo, en Toloza Crisitán y Lahera Eugenio (editores), **Chile en los Noventa**, Ed. Dolmen, Santiago, 1998.
- Revista Rocinante**. Nros. del año 1998 al 2000, Santiago de Chile.
- Revista de Crítica Cultural**, número 22, Ed. Cuarto Propio, Santiago, junio de 2001.
- Rojas Paz, Espinoza Víctor, Urquieta Julia. y Soto Hernán. **Tarda pero llega. Pinochet ante la justicia española**, Santiago, Ed. LOM, 1998.
- Salazar, Gabriel y Pinto, Julio. **Historia contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadanía**. LOM Ediciones, Santiago, 1999.

Salinas, Luis A. **The London Clinic**. LOM Ediciones, Santiago, 1999.
Teitelboim, Volodia. **La gran guerra de Chile y otra que nunca existió**, Ed. Sudamericana, Santiago, 2000.
VVAA. **Ampuero 1917 – 1996. El socialismo chileno**. Eds. Tierra Mía, Santiago de Chile, 2002.
VVAA. **Los desafíos de la izquierda hoy. Tomo Segundo**. Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz y Ed. Pluma y Pincel, Santiago de Chile, 1994.
Zeran, Faride **Desacatos al Desencanto**, Ed. LOM, Santiago, 1997.